

España. [Leyes, etc., bancarias]

Ordenación bancaria

Madrid : Rivadeneyra, 1933.

Signatura: 86200

La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

<http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html>

Aviso legal

Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de lucro siempre y cuando se cite la fuente

**COLECCION POPULAR
DE LEYES**

**ORDENACION
BANCARIA
ESTATUTOS DEL
BANCO DE ESPAÑA**

*TEXTO REFUNDIDO DE 24 ENERO 1927
DECRETO DE 8 DE FEBRERO DE 1927
LEY DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1931
DECRETO DE 24 DE MAYO DE 1933*



MADRID MCMXXXIII



1 000001 808031

86200

ORDENACION BANCARIA

ESTATUTOS DEL BANCO DE ESPAÑA

TEXTO REFUNDIDO DE 24 ENERO 1927
DECRETO DE 8 DE FEBRERO DE 1927
LEY DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1931
DECRETO DE 24 DE MAYO DE 1933

PRIMERA EDICION

COLECCION POPULAR DE LEYES
—
VOLUMEN XI



Banco de España. Biblioteca

SUCESORES DE RIVADENEYRA, S. A.
PASEO DE SAN VICENTE, 20 = MADRID

ESTUDIO PRELIMINAR

En este pequeño volumen, undécimo de nuestra *Colección Popular de Leyes*, damos a conocer a nuestros lectores dos leyes íntimamente relacionadas, mejor dicho, una consecuencia de la otra: *Ordenación bancaria y Estatutos del Banco de España*. Como se recordará, la primera de éstas fué modificada por ley de 26 de noviembre de 1931, modificaciones que hemos tenido en cuenta en nuestro volumen, y en virtud de estas modificaciones de la ley de Ordenación bancaria, el Banco de España hubo de redactar nuevos Estatutos, lo que ha llevado a cabo, habiendo sido éstos aprobados por el Gobierno de la República por Decreto de 24 de mayo de 1933.

Escasa ha sido la literatura española y extranjera que hemos encontrado que se refiera

al estudio de los Bancos, sobre todo en su aspecto histórico; no obstante hemos de intentar hacer un pequeño resumen de la evolución histórica, económica y jurídica de estas instituciones.

Antes de entrar en el estudio de los Bancos, hemos de ocuparnos de la actividad y del objeto que dió lugar a su formación: la *moneda*.

No ha llegado a saberse a ciencia cierta en qué época se dió a conocer la moneda en su primera forma. No falta quien la atribuye a Caín. En un principio, cuando no existía la moneda acuñada, se utilizaba el trueque o permuta, que consistía en ofrecer lo que a uno le sobra para conseguir aquello de que carece.

Confirmación de lo que antecede es el siguiente pasaje del gran jurisconsulto Julio Paulo, contenido en el libro XVIII de las Pandectas:

“El origen de la compraventa se remonta a la permuta. Primitivamente, en efecto, no existía la moneda. No se llamaba una cosa mercancía (*merx*) y otra precio (*pretium*), sino que cada uno, según sus necesidades y según las circuns-

tancias, cambiaba las cosas que le eran inútiles por las que le debían ser útiles..."

Los inconvenientes que este procedimiento ofrecían eran gravísimos, y Supino (1) nos los señala agrupados en la siguiente forma:

"1.º Para que el cambio se produzca, no basta que existan personas que deseen una cosa, y que otras que la posean estén dispuestas a entregarla; no basta que cada uno atribuya un valor de uso menor al bien que tienen respecto al que desea; es preciso, asimismo, que se realice una doble coincidencia en los deseos y en las cosas poseídas por cada uno.

"2.º Permutando cosa con cosa, se hace, asimismo, bastante difícil establecer la equivalencia en cada cambio, porque falta una medida siempre igual para los valores.

"3.º Un último inconveniente de la permuta nace de la imposibilidad de subdividir algunas especies de mercancías. Cuando los bienes son indivisibles físicamente, porque no pueden

(1) Véase al final «Bibliografía».

dividirse materialmente en diferentes partes, o cuando no son divisibles económicamente porque una parte separada pierde un tanto de su valor proporcional, el cambio directo de cosa con cosa resulta en muchos casos absolutamente imposible, y en otros, obliga a aquel de los contratantes que tiene un bien indivisible a tornar en cambio de él una cantidad de otros bienes, mayor de la que le es necesario, corriendo el riesgo de verlos depreciarse, y en todo caso, con pérdida para él."

Más tarde vemos aparecer ya determinados objetos que se designan como intermediarios del pago, y que son como *medida de valores*, por ejemplo: entre los anglosajones, los esclavos y el ganado; entre los aborínges de América, las conchas; en el Norte de Europa, las pieles; el maíz en la India; el cacao en Méjico y América Central; en Terranova, bacalao; en las Islas Hébridas, esterillas estrechas y largas; en Abisinia, la sal y la pólvora; el grano en Grecia y Noruega; en Virginia, los clavos; en Escocia, tabaco. En Bohemia empleaban pañitos

ligeros y tejidos muy finos, parecidos a redescillas. En Roma y Grecia, en un principio, utilizaban para el pago bueyes o carneros, y de esta costumbre proviene la palabra *pecunia*, que designa el dinero, y que se deriva de la raíz *pecuz* (*ganado*). Confirmación de lo que antecede es el siguiente pasaje de Homero:

"Después que el triunfador obtuvo una gran olla para el fuego, cuyo valor calcularon los griegos en doce bueyes, impuso también a los vencidos, como precio de la victoria, una mujer púber, entendida en diversas artes, que valoraron en cuatro bueyes."

Abundancia de estos ejemplos existen en esta época: las armas de Diómedes valían nueve bueyes; las de Glauco, cien; un trípode que se daba en premio a los atletas, doce bueyes, y una esclava veterana en alguna industria, se valoraba en cuatro bueyes.

Esta diversidad de mercancías creó una verdadera dificultad en el comercio o en las permutas, propiamente dichas, por las diferencias de valor que unas y otras tenían, y fué enton-

ces cuando los pueblos pensaron en buscar un instrumento común para los cambios. Babilón en su *Historia Económica*, dice: "Tres elementos esenciales concurren a determinar a los pueblos primitivos a preferir los metales a otro tipo de mercancías. Estos son: las necesidades del comercio exterior, las cualidades intrínsecas de los metales y, finalmente, los servicios que éstos se hallan en disposición de prestar a cada individuo bajo mil formas diferentes."

Una descripción sobre el origen y la naturaleza de la moneda nos la brinda el célebre filósofo griego Aristóteles en el siguiente pasaje:

"La necesidad introdujo la moneda. Era preciso dar y recibir en los cambios una materia que, útil en sí misma, fuese fácilmente manejable en los usos habituales de la vida; fué ésta el hierro, la plata, por ejemplo, y algunas otras de las que se determinó, desde luego, la dimensión y el peso, y que para librarse de las incomodidades de la continua comprobación, se marcó con un sello particular, signo de su valor. Pero la moneda no es en sí misma más

que una nimiedad, una cosa fútil, porque su valor arranca de la ley y no de la naturaleza, y porque el cambio, de acuerdo entre los que la usan, puede despreciarla por completo y hacerla en el acto impropia para satisfacer cualquiera de nuestras necesidades."

Los chinos pretenden ser los inventores de la moneda en forma de metal, ya que su emperador Hang-Ti había mandado batir moneda veinticinco siglos antes de Jesucristo; sin embargo, Herodoto atribuye esta invención a un rey de Lidia, Ardir II, sucesor de Giges, hacia el año 650 a 700 antes de Jesucristo; ejemplares de la moneda que este rey mandó acuñar se conservan en el Museo Británico. Estas monedas, según Gide, no eran ni de oro ni de plata, sino de una aleación de estos dos metales que denominaron *electrum* los griegos. Estas monedas tienen la forma de lingotes con rayas de tres punzones. Higino y Plinio designan como inventor de la moneda a Erictonio, cuarto rey de Atenas, trece siglos antes de Jesucristo. Plutarco atribuye esta invención a Theseo; Es-

trabón supone que fué Phenon, rey de los egi-
netas. Licurgo mandó batir moneda en hierro en
Esparta.

Los romanos empezaron a emplear moneda
de madera y de cuero; luego se dieron lingotes
de cobre sin acuñar (*æs rude*). Plinio refiere
que Servio Tulio, en señal de garantía de la
pureza del metal, hizo marcar sus lingotes con
la imagen de un buey o de una oveja. Más
tarde, a partir de la ley de las XII Tablas,
aproximadamente, fundieron lingotes de cobre
con una adición de estaño, y se estampaba en
ambas caras una figura cualquiera: un buey, un
delfín, un escudo, un ancla..., etc. El peso de
estos lingotes era, aproximadamente, 1.600 gra-
mos (cinco libras). Cuatrocientos cincuenta y un
años antes de Jesucristo, en la época de los
decenviros, Roma tuvo moneda acuñada por el
Estado. Su unidad monetaria era el *As libral*;
no existían múltiplos y los submúltiplos eran el
sensis, *triens*, *quadrans*, *sextans* y *uncia*. Cinco
años antes de la primera Guerra Púnica, siendo
cónsul Cayo Graco (doscientos sesenta y nue-

ve años antes de J. C.) empezaron a acuñar moneda de plata, siendo las piezas principales de este sistema: el *sextertius*, el *quinarius* y el *denarius*. El as de cobre se llamó *as triental*. La moneda de oro se le atribuye a César, que la introdujo durante su dictadura. Su unidad principal fué el *nummus aureus* o *aureus*, cuyo valor era de cien sesteracios. Constantino substituyó esta moneda por el *solidus*. En el año 15 antes de J. C. los romanos decidieron que la acuñación de los metales fuera prerrogativa del Senado únicamente y no del emperador, como lo era hasta entonces correspondiendo a aquél autorizar la acuñación de las monedas de cobre. Las monedas de esta época llevan el distintivo del *Senatus Consultum*.

Los godos primitivos y los celtas forjaban el oro en forma de anillos en espiral, que se pesaban o se construían ya todos del mismo peso y se contaban.

Al emplear ya como moneda los metales preciosos eran preciso dos operaciones: pesarlos y ensayarlos. Estas operaciones dieron lugar a

lo que en Derecho romano se llama *mancipation*, y que Eugène Petit describe en la siguiente forma:

“El enajenante y el adquirente se reúnen delante de cinco testigos y un *librepens* o portabalanza. Todos deben ser púberes y disfrutar del *commercium*. Es necesario, también, que la cosa de la cual se trata de transferir la propiedad, esté presente, a menos que fuese un inmueble, en cuyo caso, esta condición, que era incómoda e imposible de cumplir, no era exigida. El adquirente, entonces, coge con la mano la cosa objeto de la *mancipation* y declara ser su propietario, según el Derecho civil, por haberla comprado con ayuda del cobre y de la balanza. Finalmente, golpeaba en la balanza con una pieza pequeña de cobre que entrega al enajenante para simular el precio, consumándose de esta manera la transferencia de la propiedad.”

“El empleo de los metales preciosos como dinero tuvo, sin duda alguna, la dificultad para poder apreciar, con la suficiente precisión, tan-

to el grado de su pureza como su peso; y esto lo tenemos demostrado por China, donde hasta no hace mucho tiempo iba el mercader con la balanza y la piedra de toque para examinar el metal-moneda.

Sin embargo, son estos metales, el oro y la plata, los que satisfacen mejor que ninguna otra mercancía las condiciones que se requieren para intermediarios de los cambios.

En esta forma, de lento progreso, el dinero llegó a ser universal—como dice Turgot—, no por efecto de un convenio arbitrario entre los hombres, o por el de la intervención de una ley, sino por la naturaleza y fuerza de las cosas.

Con la invención de la moneda nos encontramos facilitado en forma extraordinaria el comercio, la transferencia de la propiedad, la cancelación de créditos..., etc., y es esta facilidad que tiene la moneda de pasar rápidamente de mano en mano donde reside—como dice Henry George—la característica de la moneda.

Ahora bien, ¿cuál es el valor de la moneda? En una ordenanza francesa del año 1349, dic-

tada por Felipe Valois, se decía: "Nadie puede dudar que a nosotros exclusiva y plenamente nos corresponde en nuestro reino acuñar moneda, señalándole el curso que nos parezca." Y Bastiat, en su folleto *Maudit argent*, escribía: "Si sabéis leer con los ojos del espíritu las inscripciones grabadas en una pieza de moneda descifraréis claramente estas palabras: Devolved al portador un servicio equivalente al que ha prestado él a la sociedad, valor comprobado y medido por el que en mí misma encierro." Y en la época de Pedro I el Grande, el fundador de San Petersburgo, un célebre escritor ruso escribía: "Nosotros no miramos el peso de nuestras monedas, sino la inscripción que éstas tienen. Valoramos, no el cobre de que están hechas, sino el nombre de nuestro emperador que está inscrito allí." En nuestra opinión, debemos manifestar que es la cantidad de metal fino que contiene la pieza lo que determina su valor.

Varias naciones, Francia, Italia, y Bélgica, creyeron necesario ponerse de acuerdo para la

adopción de un sistema monetario, y constituyeron lo que se denominó la Unión Monetaria Latina. Más tarde se adhirió Suiza.

Nuestro sistema monetario tiene su origen en la Revolución del año 1868, según Decreto de 19 de octubre del referido año. Aunque el sistema monetario español se rige por el de la Unión Monetaria Latina, nuestro país no encontró oportuno ingresar en ella por razones políticas y financieras.

La unidad monetaria es la peseta, que equivale a cien céntimos. Las principales monedas en circulación son:

Clase de metal	Valor de la moneda	PESO		LEY		Diámetro <i>Mms</i>	OBSERVACIONES
		Exacto — <i>Gms</i>	Permiso en fe- ble o en fuerte <i>M/s</i>	Exacto — <i>Gms</i>	Permiso en fe- ble o en fuerte <i>M/s</i>		
Oro	100	32,25806	1		2 (1)	35	(1) Reducido este permiso a un miligrama en las monedas.
	(2) 50	16,12903	1		2	28	R. D. 26 diciem- bre 1899.
	25	8,06451	1	900	2	24	(2) No ha circu- lado.
	20	6,45161	2		2	21	(3) R. D. de 21 Marzo 1871 y R. D. de 20 agosto 1876.
	(4) 10	3,22580	2		2	19	(4) No ha circu- lado.
Plata	5	1,61290	3	1900	2	17	
	2	25	3		2	37	
	1	10	5		3	27	
	0,50	5	5	835	3	23	
	0,20	2,50	7		3	18	
Bronce	0,10	1	10		3	16	
	0,05	10	10	950 cobre.	10	30	
	0,02	5	10	40 estaño.		25	
	0,01	2	15	10 cinc.	5	20	
		1	15	75 % níquel		15	
Cupro-níq.	0,25 (5)	7	10	25 % cobre.	3	25	Se acuña- ron por valor de dos millones de pesetas.

El Decreto de 1868, ya citado, estableció la libre acuñación de las monedas de oro y de las de plata de cinco pesetas, y al Estado se le reservó la acuñación de la moneda divisionaria.

Tienen poder liberatorio ilimitado todas las monedas de oro y las de plata de cinco pesetas. Tienen poder liberatorio hasta 50 pesetas, entre particulares, las restantes monedas de plata, e ilimitado para el Estado, que las acepta en sus cajas en cualquier cantidad. Las monedas de cobre y cuproníquel tienen fuerza liberatoria, las primeras, entre particulares, tan sólo hasta cinco pesetas, y el Estado las admite, según R. D. de 24 de marzo de 1881, hasta el 10 por 100, y las segundas sin limitación.

Las monedas de los principales países del mundo son:

Alemania	Marco.
Austria	Corona.
Cuba	Peso.
Estados Unidos.....	Dólar.
Grecia	Franco.

Inglaterra	Libra esterlina.
Japón	Yen.
Portugal	Escudo.
Suiza	Franco.
Argentina	Peso.
Bélgica	Franco.
Dinamarca	Corona.
Francia	Franco.
Holanda	Florin.
Italia	Lira.
Perú	Libra
Suecia	Corona.
Turquía	Piastra.

Una vez que hemos estudiado la evolución de la moneda, vamos a exponer la de los Bancos, instituciones de gran importancia para el desarrollo de la agricultura, industria y comercio.

La palabra *banquero* la emplea San Mateo al referir la *Parábola de los talentos* (capítulo XXV, vers. 26 y 27). Estos dicen así: "Y respondiendo su señor, le dijo: Malo y negli-

gente siervo, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, te convenía dar mi dinero a los *banqueros*, y viniendo yo, hubiera recibido lo que es mío con usura." De lo que se deduce que en aquella época era ya conocido el préstamo a interés.

Al principio los *banqueros* eran simplemente cambistas o comerciantes en dinero. Estos en Grecia se llamaban *trapezistas*, porque su oficina se llamaba *trapeza*, que significaba mesa. En Roma se les denominó *argentarii*, *menscerii*, *nuncelarri* y *collylistoe* y los Bancos *tabernæ argentiae* y *mensæ numcelariae*. La palabra española *banco* procede de la misma palabra italiana. Estos negociantes estaban en unos bancos a la puerta de las iglesias y en los mercados públicos y se dedicaban a cambiar las monedas, percibiendo por esta operación una pequeña comisión denominada *agio*. Cuando alguno de estos *banqueros* no podía cumplir sus compromisos se le rompía el banco, y de este hecho procede la palabra *bancarrota*.

Augusto estableció un Banco para los pobres, a cuyo capital destinó los bienes de los proscritos. Este Banco prestaba sin interés, pero exigía fianza doble del capital prestado. Tiberio no hizo nada nuevo, pero Alejandro Severo reprimió los excesos de la usura, prestando a un interés muy bajo y cobrando a los pobres en frutos de la tierra.

En los primeros tiempos, y sobre todo en la Edad Media, los cambistas desempeñaron un papel muy importante a causa de la gran variedad de monedas, ya que cada señor tenía derecho a acuñar su moneda, existiendo, por consiguiente, con mucha frecuencia las falsificaciones clandestinas, difíciles de evitar, ya que a veces era el mismo soberano el autor de la falsificación. En Inglaterra eran los plateros los que desempeñaban las funciones de cambistas. A medida que se iban generalizando y extendiendo estas operaciones fueron ganando confianza y se convirtieron en depositarios de dinero, iniciándose también las operaciones de giro.

Guiraud, en su *Historia de Grecia*, nos enumera las operaciones que los *trapezitas* efectuaban; éstas eran las siguientes:

“1.^a Ayudaban a sus clientes en la redacción de los contratos y los admitían en depósito;

2.^a Se encargaban de hacer los pagos, ya con los fondos que les remitía el deudor, ya adelantando ellos el dinero;

3.^a Abrían a sus parroquianos cuentas corrientes;

4.^a Giraban a otra plaza;

5.^a Operaban con dinero propio y también con el de sus clientes, y

6.^a Prestaban dinero, unas veces a particulares, otras, más raras, a Estados.

Operaban con dinero propio y también con el de sus clientes. Para inspirar confianza al público asociaban a su empresa una especie de comanditarios que le proporcionaban dinero y salían fiadores de él. Estos tenían derecho a una parte de los beneficios, y en cambio eran personalmente responsables respecto a los acreedo-

res. Eran bastante frecuentes las ruinas, y había entonces liquidación o quiebra. Por este motivo, las personas prudentes colocaban sus fondos en casa de varios banqueros distintos, repartiendo de esta suerte las probabilidades de perderlos."

También los templos fueron depositarios de dinero, sobre todo el de Apolo Delios, que entre las muchas operaciones que realizaba se contaba el préstamo a interés. Los préstamos los efectuaba por diez años y al 10 por 100 de interés, mediante hipoteca o fiadores. En caso de insolvencia tenía derecho al embargo de sus bienes y, en su caso, los de los fiadores.

La administración de los bienes del templo Delios nos la relata el referido Guiraud en la siguiente forma:

"Los bienes del dios se administraban por cuatro *hieropes* anuales. No se sabe cómo eran nombrados, si por elección o a la suerte.

Se les ve dar a préstamo con interés las sumas disponibles, en arrendamiento los bienes raíces, arrendar asimismo los impuestos, exa-

minar los contratos de obras por ejecutar y pagar a los contratistas. Tienen, por último, a su cargo la custodia de las ofrendas consagradas al dios y el material del culto.

Están sometidos a la autoridad de la Asamblea popular, que en materia financiera, como en todo lo demás, es soberana. El secretario de la ciudad asiste a todas las operaciones y da valor con su presencia a los actos de los *hieropes*. La entrega del tesoro se hace en su presencia. Entradas y salidas, todo movimiento de la caja es certificado por él. No tienen lugar sino conforme a la decisión del pueblo. Las obras ejecutadas en los edificios sagrados o las propiedades del dios no se adjudican, los pagos no se efectúan sino conforme a las leyes y en virtud de un decreto especial. Los *hieropes* son nombrados por el pueblo y, sin duda, éste puede destituirlos. Están obligados a rendir cuentas.

Intervención más directa, incesante aun, es ejercida por el Senado entero, en particular por la sección permanente, es decir, por los

préstamos en ejercicio. Asisten y vigilan a los *hieropes* en todos los actos de su administración. Sin ellos no pueden hacer los inventarios, ni hacer entrega del tesoro, ni abrir la caja sagrada.

El tesoro sagrado está depositado en el templo de Apolo. El dinero se conserva en jarras. Cada una lleva un letrero que contiene una o varias de las indicaciones siguientes: Procedencia de la suma contenida en la vasija, año y mes del ingreso, nombre y calidad de los magistrados que la han recontado, con la fecha, naturaleza del ingreso y cuantía de la suma.

Las rentas del dios no se pagan directamente a los *hieropes*, sino que hay intermediarios. Estos seguramente no son arrendatarios. ¿Son recaudadores? ¿Son banqueros? Se ignora. Ingresaban el dinero, anotaban en sus registros el total de lo recibido, y al final del ejercicio entregaban lo recibido a los *hieropes*, con documentos justificativos.

Cuando los *hieropes* tenían que hacer un

pago, sacaban del templo una jarra. Unas veces se gastaba todo el contenido de ésta, otras parte solamente. No había obligación de gastar siempre de la misma hasta vaciarla. Podían empezarse varias sucesivamente."

Los que ejercieron principalmente la industria de Banca fueron los judíos y los lombardos, en el siglo XIV, y suministraron dinero a los particulares y a los varios Estados, percibiendo los impuestos como garantía de sus anticipos. Los lombardos se establecieron en Metz hacia mediados del siglo XIII y sufrieron persecuciones, siendo expulsados y despojados de sus bienes. El haber establecido contratos demasiado onerosos y prestado a interés muy elevado, del 10 al 16 por 100 anual, fué motivo para que Juan Bodin desaprobase su conducta.

A partir de la Edad Media, los Bancos se multiplicaron por todas partes, como veremos más adelante; en unos países se constituían con carácter nacional y en otros con carácter privado, pero lo cierto y verdad es que tanto la industria como el comercio prosperó enor-

memente. ¿Motivo? El no dejar inactivos o inmovilizados los capitales, pues al depositarlos en los Bancos, en cada país se centralizaron sus disponibilidades y se iniciaron las primeras operaciones de crédito, factor tan esencial para el desarrollo del comercio y de la industria.

Jenofonte imaginó un plan de Banco nacional, que, en su opinión, debía producir grandes resultados, pero que por su magnitud no pudo llevarse a efecto. Este proyecto consistía en fundar un Banco por suscripción, en que todos los ciudadanos podían formar parte, y del cual todos podían proveerse. Sin duda fijo, además, condiciones para los que habían de tomar dinero, pues que su designio abraza también un reglamento para toda clase de negocios mercantiles. Los productos de este establecimiento debían aplicarse a la construcción de muelles, almacenes, bolsas, mercados y posadas, como también a fabricar bajeles que se arrendarían por una cierta suma a los comerciantes.

Aunque Venecia y Génova se dedicaron mucho a este género de tráfico, en ninguna par-

te prosperó tanto como en manos de los florentinos. Como no había puertos de mar en Toscana, sus industriosos habitantes tomaron con empeño el establecimiento y perfección de las manufacturas, y ya a los principios del siglo xiv, sus tejidos de lana y seda inundaban todos los puertos de Europa, de modo que, teniendo necesidad de entablar relaciones con ellos, se engrandeció extraordinariamente su crédito exterior y se multiplicaron los puntos en que recibían fondos y de donde tenían que extraerlos para cobro de lo que vendían. Por estos medios llegaron a ser tan eminentes en el tráfico del dinero, que todos los negocios de esta clase que se hacían en Europa pasaban por sus manos.

No tardaron en imitar este ejemplo los pañeros de Barcelona, quienes, ya por los años de 1349, descontaban papeles de crédito, prestaban a usura y recibían depósitos de dinero y metales preciosos. Mas, por una ley promulgada bajo los reyes de Aragón, no podían entregarse a estas operaciones sin dar antes

grandes fianzas. En 1401 se fundó en Barcelona una Caja de descuentos y préstamos con los fondos y la responsabilidad del Ayuntamiento.

El primer Banco por el estilo de los modernos de que hace mención la Historia, es el de Venecia, creado a mediados del siglo XII, siendo Dux, Michaelo Vitalis.

Hallábase la República afligida por las guerras que sostenía contra el Imperio de Oriente. Atacábanla también las potencias marítimas del Mediterráneo, y agotados sus recursos, acudió al medio violento de un empréstito forzoso, impuesto a los ciudadanos ricos. Hízose en rentas constituidas, para cuyo pago se hipotecaron todas las del Estado.

Los prestamistas constituyeron una Cámara que recibía del Gobierno el interés del empréstito a razón del 4 por 100 al año, y le distribuía a proporción de las sumas suscritas. Esta Cámara llegó a ser el verdadero Banco de Venecia.

Cualquiera que fuera al principio el carácter

de sus operaciones, sobre lo cual tenemos pocos datos históricos, es cierto que las principales eran las de giro. El Banco recibía en depósito el dinero de los particulares, les abría créditos por valor de las sumas recibidas y estos créditos se transmitían por la cesión que de ellos hacían los deudores a los acreedores, de modo que todos los pagos se hacían sin mover una pieza de moneda. La República era responsable de los depósitos, y siempre se mostró fiel a este compromiso. La confianza que inspiraban los certificados de depósito fué tal, que el Gobierno exportó la totalidad del capital metálico que le servía de garantía, sin que los interesados concibiesen el menor recelo. Las rentas anuales del Banco llegaron a subir a cinco millones de pesetas. El Banco pereció con la República en 1797.

El Banco de Génova se fundó en 1407, y en circunstancias casi semejantes a las que ocurrieron en Venecia; llamose Banco de San Jorge. Puede considerarse como un gran Monte de Piedad comercial, destinado a prestar di-

nero a los particulares y al Gobierno. Se administraba con extrema severidad, y se convirtió poco a poco en institución gubernativa, dependiente de la autoridad pública. La invasión de los austriacos, a fines del siglo pasado, puso fin a su existencia.

El Banco de Amsterdam es el tercero en el orden cronológico, y se fundó el 31 de enero de 1609, bajo la autoridad de los Estados generales de Holanda. Un artículo de sus reglamentos mandaba que todas las letras de cambio de 600 florines para arriba se pagasen en moneda de Banco, condición que se verificó después hasta la suma de 300. Este célebre establecimiento llegó a ser muy en breve la Caja de depósito y ahorro de la capital y de los pueblos circunvecinos. Los que depositaban dinero en este Banco recibían certificados transferibles mediante un ligero derecho, y en virtud de un poder que debía renovarse anualmente. El que retiraba sus fondos pagaba un derecho de un tercio por 100. No aceptaba dinero acuñado, sino con el beneficioso agiotaje de 5 por

100, ni abría cuenta corriente sino mediante una retribución de diez florines. El Banco se cerraba dos veces al año para hacer su balance, a fines de enero y de julio. Estas épocas se anunciaban al público, a fin que los interesados pudieran balancear sus cuentas en tiempo útil; condición indispensable, cuya infracción costaba una multa de 25 florines. Así se obligaba a los comerciantes a manejar sus negocios con la mayor regularidad, en cambio de la garantía que la capital le daba, afianzando los depósitos con todas sus rentas e ingresos. Estos depósitos estaban exentos de embargo, fuera del caso de quiebra declarada. Si se estudia el conjunto de operaciones del Banco de Amsterdam, se echará de ver que esta institución se fundaba en principios muy sencillos y que sus ganancias consistían en pequeños ingresos, frecuentemente repetidos. La puntualidad en los pagos de los depósitos era proverbial en Europa, y jamás había inspirado sospechas la solidez de su capital, cuando la invasión de los franceses, en 1794, puso en des-

cubierto un déficit de diez millones de florines, prestados por los administradores sin que lo supiesen los interesados, de cuyas resultas el papel del Banco experimentó una pérdida de 15 por 100, que fué una de las principales causas de su ruina.

El Banco de Hamburgo, fundado en 1619, diez años después que el de Amsterdam y casi con las mismas bases, tuvo por objeto uniformar en lo posible el valor de la moneda, considerablemente alterada por el uso. Después de muchos ensayos más o menos aceptados, se decidió que el Banco tendría dos Cajas: una para los depósitos de moneda, y otra para el de los metales no acuñados. Como en Amsterdam, los fondos de la ciudad son la garantía de los depósitos, y a todas las operaciones del establecimiento se da la mayor publicidad. Esto es lo que explica el crédito de aquella institución, que sólo ha estado algún tanto comprometida en 1813, cuando el ejército francés, situado en los muros de Hamburgo, se apodera

de los fondos del Banco, restituidos después por los tratados de 1815.

Ya hemos visto cuáles eran las funciones de los Bancos, cuya historia hemos bosquejado; todavía no había recibido el crédito por su medio toda la extensión de que era susceptible. En realidad, lo más que había hecho era facilitar los pagos entre particulares, empleando para ello las alteraciones necesarias en sus libros, y ahorrando a los interesados el trabajo de llevar dinero de una parte a otra.

No se infiere de aquí que la circulación de los billetes era desconocida. Los venecianos lo habían puesto en práctica desde los principios del siglo xv; pero la República se asustó cuando vió desaparecer el numerario, que fué la consecuencia de aquella innovación, y como las guerras que hacían en países remotos exigían grandes sumas de dinero acuñado, se apresuró a remediar tan grave inconveniente, prohibiendo de un todo los pagos en papel. Desde entonces, no se renovó en ninguna parte aquella tentativa, a lo menos, de un modo regular

y metódico. Es innegable que los Bancos de aquellos tiempos hicieron importantes servicios; pero todavía faltaba mucho para que el comercio poseyese un establecimiento de crédito, capaz de satisfacer todas sus necesidades, de abrirle el vasto campo de operaciones a que lo convidaban los estímulos que le daban los progresos de civilización y el aumento de relaciones entre los pueblos. Estaba reservada a la nación más rica y emprendedora del mundo la gloria de conferir a la Europa este incalculable beneficio, y tal ha sido la suerte del Banco de Inglaterra. Su primer objeto fué sacar el Gobierno del yugo de los especuladores y usureiros, proporcionándole dinero prestado mediante un moderado interés. Después de una fuerte oposición, la medida fué sancionada en el Parlamento, y el *bill* que la autorizaba permitía la creación de un fondo de 1.200.000 libras esterlinas por medio de suscripciones voluntarias, formando los suscriptores una Compañía bajo ciertas condiciones que determinaban su organización y gobierno. Todo el capital del

Banco debía ser prestado al Gobierno con un interés del 8 por 100 al año, y además una remuneración de 4.000 libras por gastos de administración. Prohibiose al Banco todo tráfico en géneros y mercancías; pero se le permitió descontar letras, prestar dinero con fianza de metales preciosos y vender las fianzas en caso de no haberse redimido el tiempo prefijado. El privilegio del Banco tiene fecha de 27 de julio de 1694; el interés del descuento varió en sus principios entre 3 y 4 por 100. El Banco puso en circulación un papel de crédito, pagadero al portador, con el título de *bank-notes* o billetes. Este papel estuvo en los primeros años de 15 a 20 por 100 de pérdida. El fondo recibió varios aumentos permitidos por el Parlamento, y en 1708 el Banco se constituyó en Monopolio, habiendo mandado la Cámara que no se crease ningún Banco por una Compañía de más de seis personas. Los dividendos del Banco variaron en estos años entre 5 y 9 por 100.

En 1745, de resultas de una insurrección en

Escocia, los poseedores de billetes se llenaron de pavor, y acudieron al Banco a cambiarlos por dinero efectivo. Esto es lo que se llama en Inglaterra un *run*. Pero el establecimiento tenía ya tanto crédito, que los principales establecimientos de Londres celebraron una reunión pública compuesta de 1.140 individuos y se obligaron a tomar billetes sin exigir cambio. Ya por aquel tiempo el capital había subido a 10.780.000 libras.

En 1718 se verificó el primer caso de falsificación de billetes de Banco. El autor de este delito se llamaba Vanghan y murió en la horca.

De los Bancos de emisión se han hecho diversas clasificaciones; de todas ellas elegimos para nuestro texto la establecida por M. Raphael Georges Levy, que es la siguiente:

Países cuyo privilegio de emisión está concedido a los Bancos particulares. — España, Francia, Argelia, Bélgica, Holanda, Austria, Hungría, Portugal, Suiza, Turquía, Bulgaria, Grecia, Servia, Rumania, Noruega, Dinamarca,

Egipto, Marruecos, Japón, Corea, Formosa, Haití.

Países cuyo privilegio de emisión está limitado a cierto número de Bancos.—Inglaterra, Ecuador, Bolivia, China, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Africa del Sur, Alemania, Italia, Méjico.

Países que tienen concedido privilegio de emisión a un número limitado de Bancos, pero sometidos a una legislación uniforme.—Estados Unidos.

Países que tienen un Banco del Estado.—Rusia.

Países donde el Estado emite directamente los billetes.—República Argentina, Brasil, Chile, Colombia.

Desde la época citada hasta fines del siglo XVIII la historia del Banco se compone de la renovación periódica de su privilegio, de sus continuos préstamos al Gobierno, y de las alteraciones anuales de sus dividendos y del interés del descuento. Pero en 1797 ocurrió una

crisis memorable y sin ejemplo en la Historia; crisis que prueba hasta qué punto puede llegar la fuerza de la opinión pública cuando la animan el sentido común y el patriotismo. En vista de los temores que inspiraba la guerra con la República francesa, fué tal la demanda de dinero por parte del comercio y del público, que el Gobierno creyó necesario prohibir al Banco todo pago en metálico hasta que el Parlamento decidiese el curso que habría de seguirse en semejante coyuntura, a cuya resolución, publicada el mismo día de su fecha (27 de febrero) por las autoridades del Banco, respondió el comercio del modo más cumplido y satisfactorio. En junta pública, presidida por el lord corregidor de Londres, se adoptó la resolución siguiente: "Los infrascritos, conociendo cuan importante es la conservación del crédito público en la época presente, voluntariamente declaramos que no rehusamos cobrar en billetes del Banco las sumas que se nos deban, y que procuraremos hacer todos nuestros pagos del mismo modo." Todas las Corporaciones mer-

cantiles y principales casas de comercio de la capital firmaron sin vacilar este documento. La Cámara de los Comunes nombró inmediatamente una comisión para examinar los negocios del Banco. De su informe resultó que las deudas subían a 13.770.390 libras, y los fondos existentes a 17.597.280, además de la deuda del Gobierno, que importaba 11.686.800. En consecuencia de estas averiguaciones y de las circunstancias de la época, se sancionó por la Cámara en 3 de mayo de 1797 la famosa acta llamada de "restricción", en la que entre otras disposiciones se declaraban exentos los directores del Banco de toda pena en que podrían incurrir por haber suspendido los pagos en metálico, como el Gobierno lo había mandado hacer sin autorización del Parlamento, y se prohibía al Banco pagar toda suma que pasase de veinte chelines. El acta de restricción fué prorrogada muchas veces por la Cámara, sin que por esto se resistiese el crédito. Por fin, en 1819, el célebre Peel propuso un *bill* por el que se mandaba volver a los pagos en oro desde pri-

mero de febrero de 1820, fijando la escala que sucesivamente había de darse a la onza de aquel metal, hasta primero de mayo de 1823, en que todos los pagos deberían hacerse en la moneda de oro del reino. Esta ley forma época en la historia del comercio, porque exige las piezas de oro en moneda legal. No lo son menos las de plata, pero con esta diferencia: que el pago en oro es obligatorio para el Banco, el cual, si paga en plata al que lo pide lo hace por pura condescendencia. El Banco tiene a su cargo la acuñación de la moneda, bajo la inspección del Gobierno, y con un módico descuento presta el servicio de monedas, las barras que a dicho objeto le entregan los particulares.

Por este tiempo (1823) cesó también el privilegio que tenía el Banco de emitir billetes de menos valor de cinco libras, viéndose obligado a recogerlos, pagándolos en numerario; operación que costó 7.500.000 libras. Sus capitales se hallaban, sin embargo, en tal estado de prosperidad, que tres años después pudo prestar al Gobierno 13.089.419 libras, y 1.500.000

a la Compañía de la India. Desde esta época, la historia del Banco de Inglaterra carece de interés. No contribuyó poco a ello el extraordinario número de Compañías por acciones que se formaron en 1824 en aquella nación para toda clase de empresas industriales, como minas, canales, seguros, etc. El número de estas Asociaciones llegó hasta 626, y el capital nominal a 372.173.100 libras, de las cuales sólo se pagaron 17.605.625. Además, se contrajeron 26 empréstitos para Gobiernos extranjeros, variando el capital efectivo de 92 a 60 por 100.

En Francia puede decirse que no hubo Banco verdadero hasta que Napoleón creó el Banco de Francia, reuniendo en él las diferentes Cajas de descuentos que existían desde antes de la Revolución, y la Caja de cuentas corrientes, fundada el año sexto de la República por los fabricantes para facilitar la circulación de los billetes.

El capital del Banco de Francia se compuso de 45.000 acciones de 1.000 francos cada una. Se le dió el privilegio de emitir billetes al por-

tador pagaderos en metálico. Una parte de su capital debía ser empleado en fondos públicos, y otra parte fué entregada al Tesoro del Imperio a cambio de libranzas contra los tesoreros de los departamentos.

Convertido de este modo en instrumento de gobierno, dejó de ser útil al comercio y se vió precisado a suspender pagos. En virtud de una ley de 22 de abril de 1826, el capital se elevó a 90.000.000, más una reserva de 10.000.000. El Gobierno se atribuyó la facultad de permitir o suspender los dividendos, y obligó a la Compañía a recibir y pagar un gobernador y dos vicegobernadores, que él mismo nombraba. Uno de los principales deberes que se impusieron al Banco fué el de mantener el precio de los fondos públicos, y otro el de facilitar las operaciones del Tesoro por medio de préstamos. Distrayendo así sus capitales y subordinándose ciegamente a la voz de la autoridad, claro es que no podía contribuir muy enérgicamente a la ventura del comercio ni al afianzamiento del crédito.

El Banco, en los primeros años de su existencia, mantuvo en sus arcas una masa enorme de numerario, consecuencia necesaria de su desastrosa organización y de la prohibición de pagar dividendos sin licencia superior. Como Banco de emisión, no tenía por qué guardar tantos fondos improductivos como garantía de sus billetes circulantes. Para satisfacer estas demandas basta una reserva de la quinta parte del capital. Siempre que esta reserva pase de un tercio de los billetes, el Banco se pone al nivel de los cambistas vulgares, y con menos ganancias que éstos, porque gravitan sobre él inmenso gasto de administración. El gobierno, erigiéndose en principal consumidor de los billetes de Banco, le obliga a conservar fuertes sumas de dinero para hacer frente a los reembolsos; y a estas sumas, que en manera alguna aumentan sus provechos, se sustraen al descuento de letras que no cesa de producir el interés corriente. La verdadera utilidad pública de un establecimiento de este género consiste

en el cambio frecuente de sus billetes por las obligaciones de los comerciantes.

El Banco da un pedazo de papel a la vista por otro a plazo; cobra un descuento hasta el cumplimiento de este término, y el dueño de la letra se somete a este pago porque el billete que recibe puede ser convertido inmediatamente en numerario. En estas operaciones, cuando hay confianza recíproca, el numerario figura en cantidades mínimas. Toda acumulación desproporcionada con las necesidades ordinarias de la circulación es una verdadera pérdida, una destrucción de valores; y esta consideración explica las diferentes crisis por que ha pasado el Banco de Francia.

Sus operaciones consistían en descontar letras cuyo plazo no pasase de tres meses, siempre con la fianza de tres firmas acreditadas. Presta sobre efectos públicos y metales preciosos por término de cuarenta y cinco días y por no menos cantidad de 10.000 francos. Recibe depósitos judiciales y voluntarios en dinero, en papel del Estado, en contratos y obligaciones

de toda especie, en metales preciosos, en pedrería y en toda clase de valores, cobrando un octavo por ciento por cada período que no pase de diez meses. Recibe en cuenta corriente las sumas que se le confien, en representación de sus dueños, y paga en los mismos términos. Descontaba los lunes, miércoles y viernes de cada semana y en los tres últimos días de cada mes. Para ser admitido el descuento y tener en el Banco cuenta corriente, se necesita la aprobación del gobernador y la presentación de un certificado de tres personas conocidas que atestigüen la firma del interesado y den fe de su honradez y exactitud en el desempeño de sus compromisos. Obra en calidad de Banco de depósito para con los que le confían sus fondos, y como Banco de circulación para con los que descuentan letras en su Caja.

Son infinitas las precauciones que se toman en el Banco para la seguridad de las sumas conservadas en sus sótanos.

Algunas introducciones de modificación en el reglamento del Banco y la suma prudencia con

que se han manejado sus negocios han neutralizado los vicios de su organización primitiva, y le han llevado a un alto grado de prosperidad, en términos que en 1846 prestó una gran suma al Banco de Inglaterra.

BANCO DE ESPAÑA

En 1782, bajo la protección de Carlos III, fué erigido en Madrid el *Banco de San Carlos*; la vida de este Banco nacional fué lánguida, y con motivo de las calamidades públicas que afligieron a la nación a últimos del siglo pasado y principios del actual, quedó reducido a la nulidad, hasta que en 9 de julio de 1829, por Real cédula se mandó refundirlo y darle nueva forma con el título de Banco de San Fernando, Sociedad anónima que debía subsistir por el término de treinta años, pudiendo prorrogarse por decreto especial.

Creado este Banco con el indicado fin de dar vida al de San Carlos, se celebró un convenio para transigir todos los créditos que el

Banco de San Carlos tenía contra la Real Caja de Amortización y para la inversión de la cantidad que el Gobierno tenía que hacer efectiva, que se fijó en 40 millones de reales, los cuales fueron distribuidos en 20.000 acciones, de 2.000 reales cada una, del nuevo Banco. Igualmente pasaron al Banco de San Fernando los demás fondos que resultaron a favor del de San Carlos en su liquidación, cuyos accionistas pasaron a serlo del de San Fernando, consistiendo definitivamente el capital de éste en 60 millones de reales, divididos en 30.000 acciones de a 2.000 reales.

En 1844 se estableció en Madrid, a propuesta de varias casas de comercio, el Banco de Isabel II, con un capital de 100 millones de reales, que se dedicó a hacer descuentos, giros, préstamos y depósitos; pero pronto fué universal el conocimiento de la conveniencia de refundir este Banco con el de San Fernando. Así fué que, por Real decreto de 25 de febrero de 1847, y a propuesta de D. Ramón de Santillán, entonces Ministro de Hacienda, los Ban-

cos de San Fernando y de Isabel II se reunieron en uno solo, formando el Banco Español de San Fernando, con un capital de 400 millones de reales, representados por 200.000 acciones de a 2.000 reales cada una, siendo su duración la de veinticinco años, y con autorización para establecer Cajas subalternas en las provincias.

En 1848 se publicaron los nuevos Estatutos, por los que se obligaba al Banco a tener en metálico, como mínimo, una cantidad igual al tercio de los billetes en circulación.

En 1849 fué reorganizado, reduciendo a la mitad su capital y el número de sus acciones transferibles, con la facultad de emitir billetes por valor de la mitad de su capital.

En 1851, a iniciativa de D. Alejandro Mon, sufrió otra reorganización, y su capital fué reducido a 120 millones, con la facultad de aumentarlo hasta los 200 fijados en la ley de 1849, y quedando autorizado para la emisión de billetes por una cantidad igual a la del capital social, de manera que mientras por un lado se redujo en 80 millones el capital efec-

tivo del Banco, se elevaba en 20 millones el papel moneda que podía poner en circulación. Los Estatutos y Reglamento del Banco fueron aprobados en febrero y marzo de 1852, respectivamente.

En abril de 1854 el Banco atravesó momentos de gran peligro a causa de la destitución, por el entonces Ministro de Hacienda Sr. Domenech, del Gobernador del Banco, Sr. Santillán, pues el público no acogió esta noticia muy favorablemente, y se apresuró a retirar sus fondos de depósitos y cuentas corrientes y a cambiar los billetes. Afortunadamente, el Banco pudo salvar con éxito la situación y volvióse a la normalidad.

En 28 de enero de 1856, por ley de las Cortes Constituyentes, se dispuso que el Banco Español de San Fernando cambiase su nombre por el de Banco de España, con la duración de veinticinco años y la obligación (art. 3.º) de establecer sucursales, dentro del término de un año, en Alicante, Bilbao, Coruña, Málaga, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zarago-

za. Dicha ley facultaba el establecimiento de Bancos particulares, aun en el mismo período de un año, pero excluyéndose de manera que en cada localidad sólo podía haber un establecimiento de emisión, cuyo derecho se determinaría por la prioridad de la fecha de la solicitud.

Las operaciones a que se dedica el Banco de España son las correspondientes a los Bancos de emisión y descuento.

La ley de 19 de octubre de 1868 declaró libre la creación de Bancos territoriales, agrícolas y de emisión y descuento, así como la de las Sociedades de crédito y de Asociaciones que tuvieran por objeto cualquier empresa industrial o de comercio; pero, por Decreto del Gobierno de la República de 19 de marzo de 1874, refrendado por D. José Echegaray, se instituyó un Banco Nacional, bajo la base del Banco de España; el carácter de Banco Nacional, por medio del cual se estableció la circulación fiduciaria, única en sustitución de la existente a cargo de los Bancos de emisión, a

cuyo fin el de España, creado por ley de 28 de enero de 1856, se reorganizó con el capital de 400 millones de reales, o sean 100 millones de pesetas, representado por 200.000 acciones transferibles, de a 500 pesetas una, sin perjuicio de la facultad de elevar el capital hasta la mitad más, o sea hasta 150 millones de pesetas, previa autorización del Gobierno, y siendo de treinta años el plazo de su duración.

Las sucursales que desde esta época se han ido estableciendo son las siguientes: 1858, Valencia y Alicante; 1874, Vitoria, Oviedo, Zaragoza, Pamplona, Málaga, Barcelona, San Sebastián, Cádiz, Bilbao, Palma, Valladolid y Coruña; 1875, Santander, Jerez de la Frontera y Sevilla; 1878, Tarragona y Reus; 1879, Granada y Córdoba; 1880, Badajoz; 1884, Burgos, Huelva, Jaén, Huesca, Cáceres, Gerona, Salamanca, Palencia, Almería, Ciudad Real, Gijón, Toledo; Zamora, Alcoy y Murcia; 1885, Logroño y Vigo; 1886, Lérida, Orense, Pontevedra, Ávila, Guadalajara, Segovia, Castellón, León, Santiago y Lugo; 1887, Cartagena, Albacete, Teruel, Cuenca, Soria y Santa Cruz de Tenerife; 1889, Las Palmas; 1892, Haro; 1902, Tortosa, París y Londres (Agencias); 1904, Algeciras; 1909, Tánger (Re-

presentación); 1912, Melilla; 1920, Tetuán y Larache (Agencias); 1928, Don Benito y Valdepeñas; 1929, Cañabra, Játiva y Talavera.

Los billetes al portador pueden dividirse en series de las cantidades que el Banco juzgue oportunas, no siendo de cantidad menor de 25 pesetas, ni mayor de 1.000. A tenor de dicha ley, la falsificación de los billetes del Banco de España se persigue de oficio y como delito público.

Los Bancos de emisión y descuento existentes en la Península e islas adyacentes fueron declarados en liquidación, empero, algunos de ellos, como por ejemplo los de Barcelona y Bilbao, sólo recogieron sus billetes y quedaron funcionando, dedicándose a las restantes operaciones propias de dicha clase de establecimientos, y otros se quedaron como sucursales del Banco de España, que las estableció en seguida en las plazas importantes donde no las tenía, y posteriormente ha ido y va estableciéndolas en los demás puntos a que viene obligado por las leyes.

Con motivo de la guerra civil, que dificultaba la pronta y segura traslación material de fondos, los billetes fueron al principio domiciliados, y sólo podía exigirse su reembolso en las sucursales que los habían emitido y en la Caja central; pero, pasadas aquellas circunstancias, los billetes del Banco de España circulan por toda la Península e islas adyacentes, y son admitidos y cambiados por efectivo en cualquiera de las cajas del mismo, así de la central como de sus sucursales.

J. M. R.

Agosto de 1933.

BIBLIOGRAFIA

JUAN ANTONIO GALVARRIATO.—*El Banco de España* (obra editada por el Banco de España). 1932.

H. C. CAREY.—*Principios de Ciencia social compendiados de la edición oficial de Filadelfia*, por Miguel Cabezas. 1888.

JOSÉ M.^a LIOVERA.—*Tratado elemental de Sociología cristiana*. — Sexta edición. — Luis Gili, editor.—Barcelona. 1930.

DICCIONARIO DE LA LENGUA CASTELLANA, dirigido por P. Luis de Ramón. 1896.

CAMILO LUPINO.—*Principios de Economía política*.—Traducción de la 3.^a edición alemana por J. A. Cienfuegos. 1931.

ADOLFO WEBER.—*Tratado de Economía política. Una introducción*.—Traducción de la tercera edición alemana por J. A. Cienfuegos. Librería Bosch.—Barcelona. 1931.

CHARLES GIDE.—*Curso de Economía política*.—Traducción de José Muñoz Escámez. Octava edición.—Librería de la Viuda de Ch. Bouret. París.

MAC-CULLOCH.—*Principios de economía política*.—Traducción de Pedro G. de la Serna. Madrid, 1888.

ALVARO DE LA HELGUERA.—*Economía política*. Primera edición.—J. Monteso, editor.—Barcelona, 1931.

F. VON KLEINWACHTER.—*Economía política*.—Traducción de la 4.^a edición alemana por Gabriel Franco (2.^a edición española).—Gustavo Gili, editor.—Barcelona. 1929.

HENRY GEORGE.—*La ciencia de la Economía política*.—Traducción del inglés por Baldomero Argente.—Francisco Beltrán.—Madrid. Segunda edición.

A. WAGNER.—*El Crédito y los Bancos*.—De la obra *Economía*. Versión del alemán por Adolfo A. Buylla.—*La España Moderna*.—Madrid.

ROBERTO A. MURRAY.—*Lecciones de Economía*

política.—Traducción de la 2.^a edición italiana por Francisco G. de Cáceres.—H. de Reus, editores.—Madrid, 1915.

ANTONIO SACRISTÁN Y ZABALA.—*Teorías de la contabilidad general y de administración privada* (2.^a edición). 1925.

Decreto-ley de Ordenación bancaria, texto refundido.

EXPOSICIÓN.—SEÑOR: El régimen jurídico de la Banca privada constituye, después de las disposiciones contenidas en los Reales decretos de 25 de diciembre de 1925 y 25 de mayo de 1926 y en la Real orden de 6 de noviembre de 1926, un Cuerpo de preceptos notablemente enriquecido en su contenido y ampliado en sus pensamientos respecto al artículo 2.º de la ley de Ordenación bancaria de 29 de diciembre de 1921.

Han sido objeto de nuevas disposiciones las condiciones para el ejercicio del cargo de Comisario Regio de la Banca privada; se ha subordinado a una previa autorización administrativa el uso público del nombre de Banco o banquero; nuevas normas bancarias se han incorporado a las establecidas por la ley de

Ordenación; el Consejo Superior Bancario ha potenciado sus facultades con la muy importante de poder convertir alguna o todas las normas dictadas para la Banca inscrita en normas de observancia general para todos los Bancos operantes en España, y, finalmente, para que no resulten estériles las normas bancarias, puede hoy el Comisario Regio de la Banca privada aplicar sanciones a los Bancos y banqueros que las desobedezcan.

La importancia de la ordenación de la Banca privada hace indispensable una refundición de las disposiciones en vigor. Para ello, en virtud de las consideraciones expuestas, el Ministro que suscribe tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Decreto-ley.

Madrid, 24 de enero de 1927.

SEÑOR :

A L. R. P. de V. M.,
JOSÉ CALVO SOTELO

REAL DECRETO-LEY

Núm. 190.—A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

ARTÍCULO 1.º Se aprueba como ley del Reino la refundición de la ley de Ordenación bancaria inserta a continuación.

ART. 2.º En la referencia oficial, dicha refundición será citada como ley de Ordenación bancaria, texto refundido.

Dado en Palacio a veinticuatro de enero de mil novecientos veintisiete.

ALFONSO

El Ministro de Hacienda,
JOSÉ CALVO SOTELO.

LEY DE ORDENACION BANCARIA

ARTÍCULO 1.º *Régimen del Banco de Emisión.*—La facultad exclusiva para emitir billetes al portador, concedida al Banco de España por la ley de 14 de julio de 1891 hasta 31 de diciembre de 1921, se prorroga por otros veinticinco años, que terminarán el 31 de diciembre de 1946, ejerciéndola el Banco como único de emisión en el territorio nacional y en las posesiones españolas.

Por razón de esta exclusiva, incumbirá al Banco la regulación del cambio sobre el Extranjero desde la fecha en que el Gobierno, legalmente autorizado, decretare el régimen legal del patrón oro. Esta obligación cesará en los casos que determine la ley de implantación del patrón oro y en cualquiera de los siguientes:

1.º Cuando durante un ejercicio económico del Estado los gastos realizados por éste con cargo a los presupuestos, más los que verifique

la Caja Ferroviaria, las Mancomunidades Hidrológicas y los de las demás entidades que ejerzan funciones públicas por delegación del Estado, con presupuestos propios no incluidos en los generales de aquél, excedieran de los ingresos respectivos, deducción hecha de los provenientes de operaciones de crédito en más de 15 por 100 de los dichos ingresos.

2.º Cuando el expresado déficit en el promedio de un trienio excediere del 5 por 100; y

3.º Cuando lo aconsejaren circunstancias económicas excepcionales, que habrán de ser apreciadas por una ley o, en caso de urgencia, por un Decreto dictado luego de ser oído el Consejo de Administración del Banco de España, del cual Decreto se dará cuenta a las Cortes. En los casos 1.º y 2.º, para el cómputo, así de los gastos como de los ingresos, se rebajarán las partidas de orden.

Esta prórroga se concede de acuerdo con las bases siguientes:

PRIMERA.—El capital del Banco, de 150 millones de pesetas, se aumentará a 177 millones

de pesetas, mediante la creación de 54.000 acciones idénticas a las actuales y completamente liberadas, que serán ofrecidas a los tenedores de los 90.000 bonos del mismo Banco, actualmente en circulación, realizando el canje a razón de tres acciones por cada cinco bonos.

Los portadores de bonos que no acepten dicho canje deberán presentarlos dentro de los tres meses de promulgada la presente ley para recibir el importe de su reembolso a la par, con los intereses devengados hasta 31 de diciembre de 1921.

Las acciones correspondientes a los bonos reembolsados serán ofrecidas por subasta a los actuales accionistas.

El beneficio íntegro que se produzca por el canje de los bonos y por la prima de la subasta será llevado a un fondo de previsión de los que autoriza la base quinta.

Después de transcurridos cinco años, a contar desde 1.º de enero de 1922, podrá el Banco solicitar en una o varias veces el aumento de

su capital hasta la cifra máxima de 250 millones de pesetas.

El Gobierno podrá autorizar dichos aumentos de capital con los requisitos que establezcan los Estatutos y siempre de acuerdo con los dos siguientes preceptos:

A) Que se compense al Estado de toda merma que en la aplicación de la escala para la participación en los beneficios pudiera producirse en relación con el valor absoluto que le correspondería al capital autorizado de 177 millones de pesetas, que en todo caso servirá de base para liquidar la participación de beneficios entre el Estado y el Banco.

B) Que el aumento de capital no implique disminución en los impuestos de carácter general a que esté afecto el Banco de España en cuanto estos impuestos tengan carácter progresivo.

A los efectos de la aplicación de estos preceptos, se entenderá que los tipos así de participación del Estado como de imposición sobre beneficios y dividendos, serán los que habrían

correspondido aplicar a las cifras absolutas de los dichos beneficios y dividendos, supuesto un capital acciones de 177 millones de pesetas.

SEGUNDA.—La circulación de billetes del Banco de España deberá estar garantizada por metálico en caja en la proporción siguiente:

1.600.000 Hasta 4.000 millones, con el 45 por 100, siendo en oro, por lo menos, el 40 por 100 y el resto en plata.

+ 500.000 Sobre el exceso de los 4.000 millones y hasta 5.000 millones, el 60 por 100, siendo en oro, por lo menos, el 50 por 100 y el resto en plata.

+ 500.000 A petición del Banco de España, y previo informe del Consejo Superior Bancario, en el sentido de estimarlo indispensable para la economía nacional, el Gobierno autorizará el aumento de la circulación hasta la suma máxima de 6.000 millones, con el mismo régimen de garantía metálica que se establece para la circulación que exceda de 4.000 millones hasta la de 5.000 millones, sin que esta ampliación

pueda dar lugar a otras compensaciones en favor del Estado.

La existencia de plata que haya de garantizar la circulación de billetes será en moneda de curso legal en España.

El oro podrá ser en moneda española por su valor nominal; en moneda extranjera de oro, por su valor a la par monetaria, y en barras, a razón de 3.444 pesetas 44 céntimos por kilogramo de oro fino, que es el vigente con arreglo a la Ley monetaria.

Hasta el 3 por 100 de la reserva metálica en oro que en cualquier momento deba tener el Banco, podrá computársele el oro disponible a la vista que tenga en poder de sus correspondientes o Agencias en el Extranjero.

El Banco no podrá, sin autorización del Consejo de Ministros, disminuir su existencia en oro amonedado y en barras, y procurará realizar cuantas adquisiciones de este metal sean convenientes mientras no le sea notificado acuerdo en contra del Consejo de Ministros. En ningún caso podrá ser autorizado el Banco

para disminuir su existencia oro mientras la cifra de ésta no sea superior a la que corresponderá como garantía metálica para una circulación de 6.000 millones, sin perjuicio, únicamente, de lo dispuesto en la base séptima.

Cuando el exceso de la reserva metálica sobre el mínimo legal correspondiente sea inferior al 50 por 100 de dicho mínimo, la diferencia entre la cantidad representada por los billetes en circulación y la reserva total del Banco, será gravada con un impuesto especial, a saber:

5 por 1.000, si tal excedente fuere inferior al 10 por 100 de este mínimo.

4 por 1.000, si fuese de 10 o más por 100, sin llegar al 20.

3 por 1.000, si llegando a 20 no alcanzase a 30.

2 por 1.000, si siendo de 30 o más no llegara a 40; y

1 por 1.000, si alcanzando a 40 no llegase a 50.

Para el cómputo del excedente se prescin-

dirá de la división entre oro y plata. El importe de los anticipos del Banco al Estado, con cargo a la cuenta a que se refiere el apartado C) de la base tercera, en cuanto no devengue interés, será deducido de la suma de la circulación en descubierto a los efectos del impuesto. Este se liquidará trimestralmente, tomando por base el estado medio de la circulación y de las reservas, según los estados correspondientes a las semanas cuyos sábados estén comprendidos en el período.

Dentro del primer trimestre de cada año natural, las sumas devengadas por este impuesto durante el año anterior se aplicarán al reembolso de los pagarés del Tesoro de la ley de 2 de agosto de 1899, hasta su extinción, y una vez extinguidos, a la amortización de la Deuda del Estado existente en la Cartera del Banco. La recogida de esta Deuda se hará por la cotización media en la Bolsa de Madrid, durante el período en que se devengase el impuesto o por el tipo a que aparece valorada en el inventario-balance de 31 de diciembre

de 1930, cuando aquella cotización fuese inferior.

Desde la fecha en que deba comenzar a regir el patrón de oro, el Banco estará obligado a comprar el metal de esta clase que le ofrezcan los particulares en la sede central del Banco en cantidades superiores a 50.000 pesetas, al precio fijo base del régimen, deducidos los gastos de ensayo con arreglo a la tarifa legal acordada por el Gobierno.

La ley mínima del oro que debe ser adquirido por el Banco en las condiciones de este párrafo, se determinará por Decreto del Gobierno.

Desde la misma fecha, el Banco estará obligado a entregar a todo particular que lo solicite, en la Central, en cantidad superior a 50.000 pesetas, y a cambio de sus billetes, oro en barras, al precio fijo citado, sin deducción alguna, o bien cuando el Gobierno así lo acuerde, divisas sobre las plazas extranjeras que el mismo Gobierno determine. La entrega del oro o de las divisas habrá de efectuarse

necesariamente antes de la puesta del sol del primer día hábil siguiente al de la petición.

Si el Gobierno legalmente autorizado limitase el poder liberatorio de las monedas de plata de cinco pesetas, los billetes del Banco serán de aceptación obligatoria entre los particulares y las Cajas públicas desde la misma fecha en que empiece a regir dicha limitación. En ningún caso podrá el Banco de España obligar en los pagos que verifique a aceptar monedas de plata, ni aun de cinco pesetas, en cantidad superior a medio kilo.

DECRETO DE 27 DE MAYO DE 1931

Sometida a informe del Consejo Superior Bancario la petición formulada por el Banco de España ante este Ministerio para que, por aplicación de la base segunda del artículo 1.º de la ley de Ordenación bancaria de 21 de diciembre de 1921, se autorice la elevación de la cifra de circulación fiduciaria sobre el lími-

te de 5.200 millones, e informando el mencionado Consejo Superior Bancario en el sentido de que se estima indispensable para la economía nacional que, aun más que conveniente, es necesario autorizar el aumento de la circulación de billetes hasta el límite previsto en la base segunda del artículo 1.º de la referida ley de Ordenación bancaria.

El Gobierno provisional de la República, a propuesta del Ministro de Hacienda, viene a decretar lo siguiente:

ARTÍCULO ÚNICO. *Se autoriza al Banco de España para que pueda aumentar la circulación de billetes hasta el límite previsto en la base segunda del artículo 1.º de la ley de Ordenación bancaria, con el mismo régimen de garantía metálica en la propia base establecida.*

Dado en Madrid a veintisiete de mayo de mil novecientos treinta y uno.—El Presidente del Gobierno provisional de la República, NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.—El Ministro de Hacienda, INDALECIO PRIETO TUERO.

TERCERA.—A) Continuará hasta 31 de diciembre de 1946 el anticipo, sin interés, de 150 millones de pesetas que el Banco de España hizo al Tesoro público en virtud del artículo 4.º de la ley de 14 de julio de 1891.

B) No será exigible hasta 31 de diciembre de 1946 el préstamo de 100 millones representado por pagarés procedentes de Ultramar, devengando el interés de 2 por 100 anual sobre la cantidad no reembolsada, en virtud de lo dispuesto en la base novena.

C) Continuará el crédito de Tesorería hasta la cantidad de 350 millones de pesetas, en las condiciones establecidas en los artículos 2.º y 3.º del Real decreto de 7 de octubre de 1920, o sea mientras el saldo a favor del Banco no exceda de 200 millones no devengará interés; el exceso sobre dicha suma devengará interés a razón de 1 por 100 anual cuando persista sin interrupción más de seis meses, elevándose al 2 por 100 anual cuando dicho plazo exceda de nueve meses. La determinación del expresado saldo se hará de-

duciendo del que arroje a favor del Banco de España la cuenta corriente en plata, la suma de los que resulten en contra del mismo en las diferentes cuentas que se llevan al Tesoro por los conceptos de oro, reservas de contribuciones y demás que figurarán en el pasivo del Banco. La deducción por concepto del oro que el Tesoro tenga en el Banco se efectuará estimando el oro por su valor nominal, a los efectos de determinar el importe del crédito de Tesorería abierto en favor del Estado, pero dicho oro se computará por su valor en el mercado para determinar el momento en que el descubierto que tenga el Estado en su cuenta de Tesorería ha de comenzar a devengar interés. Se elevará el importe de la cuenta de Tesorería del 10 al 12 por 100 de los créditos anuales autorizados del presupuesto de Gastos del Estado cuando dichos créditos sean superiores a 3.500 millones de pesetas.

Los anticipos al Estado, con cargo a dicha cuenta, se harán en oro por su valor nomi-

nal o en plata, según lo requiera el Ministro de Hacienda, previo acuerdo del Consejo de Ministros, sin que dichos anticipos en oro puedan exceder del 50 por 100 del límite de la expresada cuenta de Tesorería, ni mermar la garantía metálica del billete establecida en la base segunda del artículo 1.º de la ley de Ordenación bancaria, de 29 de diciembre de 1921. Las devoluciones del Tesoro, y en su caso el pago de los intereses al Banco, se harán en el mismo metal en que fueren hechos los anticipos. Para establecer el saldo se compararán separadamente los créditos y débitos en cada metal.

D) El Banco de España realizará gratuitamente el servicio de Tesorería, así en España como en el Extranjero.

Las operaciones de cualquier clase en el Extranjero devengarán las comisiones de Banca que el establecimiento haya de abonar por la situación y aplicación de fondos en todas las plazas, y la cantidad fija convenida para el sostenimiento de las Agencias en varias na-

ciones subsistirá mientras el Estado estime conveniente su conservación para los intereses públicos.

Todos los demás servicios permanentes u ocasionales que el Banco preste al Estado serán regulados por convenios especiales y devengarán la retribución establecida en ellos.

E) Como compensación extraordinaria a la prórroga del privilegio de emisión que se otorga en esta ley, el Estado participará en la distribución de los beneficios del establecimiento del modo siguiente:

Mientras el dividendo no exceda del 10 por 100 del valor nominal de las acciones, el Estado no percibirá sino los impuestos legalmente establecidos.

Si el dividendo excede del 10 y hasta el 11 por 100, el Estado percibirá un 5 por 100 del equivalente de dicho exceso.

Sobre el exceso del 11 y hasta el 12 por 100, percibirá el 10 por 100.

Sobre el exceso del 12 y hasta el 13 por 100, percibirá el 15 por 100.

Sobre el exceso del 13 y hasta el 14 por 100, percibirá el 20 por 100.

Sobre el exceso del 14 y hasta el 15 por 100, percibirá el 25 por 100.

Sobre el exceso del 15 y hasta el 16 por 100, percibirá el 30 por 100.

Sobre el exceso del 16 y hasta el 17 por 100, percibirá el 35 por 100.

Sobre el exceso del 17 y hasta el 18 por 100, percibirá el 40 por 100.

Sobre el exceso del 18 y hasta el 19 por 100, percibirá el 45 por 100.

Sobre el exceso del 19 y hasta el 20 por 100, percibirá el 50 por 100.

A la cuota de cada grado se sumarán todas las cuotas de los grados inferiores.

Del remanente que resulte, una vez que las acciones hayan percibido un dividendo del 20 por 100, corresponderá al Estado el 52 por 100 de dicho remanente.

El Banco detraerá cada año de los beneficios obtenidos la suma de dos millones de pesetas, aportándola a la reserva especial pre-

vista en la base séptima; y esta suma no se tendrá en cuenta para la participación del Estado en los beneficios, pero todas las demás aplicaciones que acuerde el Banco al fondo de reserva permanente o a los demás fondos de reserva o previsión se sumarán igualmente a los dividendos realmente distribuidos, para suponer el dividendo anual computable en orden a la participación del Estado. Se detraerá asimismo, antes de fijar la participación del Estado, el importe de la contribución directa del Estado que grave los beneficios sociales.

Para este cómputo se entenderá como dividendo realmente percibido por los accionistas el importe de éste sin deducción de la correspondiente imposición directa del Estado sobre dividendos.

Para el cómputo de beneficios y aplicación a los mismos de la escala de participación del Estado, se tomará por base el balance sometido por el Banco a la Administración de Hacienda, para la aplicación del impuesto de Utilidades o aquel otro con que el Estado le

substituya, aceptándose las deducciones autorizadas o que en lo sucesivo se autoricen para valores en suspenso, y sin que la participación del Estado en los beneficios dé lugar a otras fiscalizaciones y comprobaciones que las establecidas en la ley y Reglamento del impuesto de Utilidades y las que en lo sucesivo se establezcan con carácter general, bien para los Bancos, bien para las Sociedades sujetas a dicho impuesto o aquel que le substituya.

CUARTA. — El Banco de España no podrá aumentar su actual cartera de renta, constituida por títulos de la Deuda perpetua al 4 por 100 interior, acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos y acciones del Banco del Estado de Marruecos, y se le autoriza a conservarla en su actual estado mientras el importe de la misma no exceda del 25 por 100 de la suma que alcanza su cartera de operaciones comerciales, representada por los descuentos, pólizas de cuentas de crédito, pólizas de crédito con garantía y pagarés de préstamos garantidos por valores mobiliarios; no se

computará a este efecto la póliza a que se refiere el apartado C) de la base tercera. Si durante seis meses consecutivos en la mayoría de los balances semanales la cartera de renta excediera de 25 por 100 de la cartera de operaciones comerciales, el Gobierno podrá disponer que el Banco, en el plazo y forma que se concierte, proceda a la venta de valores que constituyen la cartera de renta, hasta dejarla reducida al límite indicado.

Las acciones del Banco del Estado de Marruecos nunca podrá venderlas el Banco sin autorización expresa del Gobierno.

QUINTA.—Aparte del fondo de reserva que autoriza limitadamente el artículo 12 del Decreto-ley de 19 de marzo de 1874, e ilimitadamente la ley de 17 de mayo de 1898, y de la reserva forzosa que previene el apartado E) de la base tercera, el Banco, por acuerdo de su Consejo, podrá constituir otros fondos de reserva o previsión para adquisiciones de oro o para fines especiales, salvo los derechos que al Estado corresponden, según expresa el

apartado *E*) de la tercera base de este artículo.

SEXTA.—El importe de los billetes en circulación, unido a la cantidad representada por depósitos de metálico y saldos de cuentas corrientes de efectivo, no podrá exceder en ningún caso del valor de las existencias en metálico, pólizas de préstamos, créditos con garantía estatutaria, efectos descontados realizables en el plazo máximo de noventa días y la cartera de renta que el Banco conserve conforme a esta ley.

SÉPTIMA.—En el caso de que el Gobierno, en virtud de la autorización que por esta ley se le otorga, por espontáneo y singular acuerdo o en virtud de concierto internacional en el que participe España, decida ejercer una acción interventora en el cambio internacional y en la regularidad del mercado monetario, el Banco de España, si esta intervención se efectúa por su mediación o con su intervención, participará en la misma proporción que el Estado en las operaciones a que dicha política dé lugar.

El oro del Banco que se aplique a la realización de dicha acción interventora será siempre computado íntegramente como reserva, a los efectos de la base segunda, mientras continúe siendo de su exclusiva propiedad, incluso en el caso de que los dichos fondos fuesen situados en poder de los corresponsales del Banco en el Extranjero, sin que obste para situarlos con tal fin la limitación consignada en el párrafo penúltimo de la base segunda. Esta forma excepcional del cómputo cesará a medida que cese la aplicación de los fondos que motivan la excepción, y caso de que las sumas correspondientes sean reintegradas en el Extranjero, desde que dichas cantidades hayan podido ser situadas nuevamente en el Banco, en los términos usuales de las remisiones internacionales de fondos.

El Estado, para la participación que debe tomar en la operación, aplicará el oro del Tesoro, el que pueda obtener de la cuenta de Tesorería y el que se proporcione con los créditos que el Parlamento le otorgue.

Las ganancias y pérdidas que por razón de esta política se originen serán repartidas por mitad entre el Estado y el Banco; pero la parte que a éste corresponda de la pérdida nunca podrá rebasar el saldo de la reserva de dos millones de pesetas anuales que, con el carácter de forzoso y exenta para el cómputo de la participación en los beneficios, establece la base tercera, más el 50 por 100 de los beneficios líquidos correspondientes al Banco, a tenor de lo dispuesto en el párrafo quinto del apartado e) de dicha base tercera, en el ejercicio en que las pérdidas se produjeran.

Las normas generales de la intervención competerán al Ministro de Hacienda, previa consulta a la Junta Interventora del Cambio Exterior, de cuyas deliberaciones y acuerdos quedará constancia.

La Junta estará constituida: por el Gobernador del Banco de España, Presidente; un Consejero del establecimiento, de la representación de los accionistas; un representante de la Banca inscrita, Consejero-Gerente de Banco

de capital superior a 25 millones de pesetas; un Vocal designado libremente por el Parlamento en cada legislatura, ostente o no la condición de Diputado, y finalmente, un Vocal designado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda.

En caso de que la acción interventora en el cambio internacional y en la regularidad del mercado monetario se confíe a un organismo distinto del Banco de España y sin su intervención, el Gobierno concertará con éste la participación que al Banco corresponda por el concurso que preste al desarrollo de dicha acción interventora. En este caso, si el Estado acordara ulteriormente la cesación de la acción interventora o el auxilio en ella del Banco, habrá de devolverle en oro las cantidades que en este metal hubiere aportado el Banco para realizarla. El plazo de la devolución no podrá exceder de seis meses, a contar de la fecha en que cesara la acción interventora o la participación del Banco en la misma.

OCTAVA. — El Banco de España concederá

una bonificación en el interés que tenga establecido para los descuentos, en cuanto estas operaciones las realice a través y por medio del redescuento de los Bancos, banqueros y Sociedades de crédito adscritos al régimen que se establece en el artículo 2.º de esta ley. Esta bonificación será del 1 por 100 cuando el interés que aplique el Banco a las respectivas operaciones sea el de 5 por 100 o tipo superior, y se deducirá, en caso de ser inferior al 5 por 100, en la proporción necesaria, para que equivalga a una quinta parte del tipo de interés que aplique el Banco para sus operaciones directas.

Igual régimen de bonificación, pero limitada a un tipo invariable del $\frac{1}{2}$ por 100, se concederá para las operaciones con garantía de valores a que los Bancos, banqueros y Sociedades antes indicados presten su aval, con excepción de las que se refieran a títulos del Estado o del Tesoro y a valores industriales de Empresas que exploten un monopolio del Estado, y aquellos títulos o valores cuyos

servicios de interés y amortización—en caso de ser amortizables—esté garantizado directamente por el Estado. Las operaciones sobre estos títulos o valores podrán dar lugar a un régimen de bonificación concertado entre el Banco de España y el Consejo Superior de la Banca privada, con la aprobación del Ministerio de Hacienda.

El régimen de bonificación sobre los descuentos será aplicado por el Banco de España a las Cajas de ahorro del Patronato del Gobierno.

Se aplicará asimismo a las operaciones de descuento que se efectúen a los agricultores, cuyo importe se destine precisamente a intensificar la producción, mediante que los efectos sean descontados con la firma del propietario de la tierra y de un Sindicato agrícola de la comarca, de un banquero local o de otra firma aceptada por el Banco. En todo caso, el Banco estimará libremente la garantía que le merezcan dichas firmas.

Se establecerá en los Estatutos el régimen a

que han de obedecer las operaciones a que se refieren los dos párrafos anteriores.

Las cantidades prestadas por el Banco con garantía de mercaderías por mediación de las entidades comprendidas en este régimen de bonificación podrán alcanzar mayor cuantía proporcional en relación con su valor que la que tenga el Banco establecida con carácter general.

NOVENA.—Se establecerá, bajo la dependencia inmediata del Gobernador, un servicio inspector de la contabilidad del Banco, que estará a cargo de los funcionarios de Hacienda que el Ministro del ramo designe, y que no podrán exceder de diez. El Banco estará obligado a facilitar locales adecuados y a reintegrar al Estado el importe de los sueldos de dichos funcionarios, el de los gastos de su desplazamiento en ejecución del servicio y el del material necesario.

DÉCIMA.—El Consejo del Banco de España se ampliará con un Consejero nombrado por los Bancos y banqueros sujetos al régimen de

intervención, designado con arreglo a las normas que se establecerán por el Ministro de Hacienda; un Consejero nombrado por el Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, y otro designado por las corporaciones oficiales agrícolas, en la forma que determine el Ministerio de Fomento. Los expresados Consejeros, cuyas funciones y facultades determinarán los Estatutos, tendrán que afianzar su gestión con un número de acciones del Banco de España igual al que tengan depositado en tal concepto los demás Consejeros de dicho Banco. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, nombrará tres Consejeros del Estado que representarán los intereses generales de la economía nacional en el Consejo. Los expresados Consejeros no tendrán que afianzar su gestión; no podrán poseer, mientras ejerzan el cargo, acciones del Banco ni otras que figuren en la cartera de renta del Establecimiento, así como tampoco realizar operaciones con éste, salvo la de cuenta corriente. Ejercerán el cargo sin limitación

de tiempo, pero podrán ser removidos libremente por el Gobierno en cualquier momento. Ninguna otra diferencia podrá establecerse por razón ni precepto alguno entre los Consejeros del Estado y los demás. Los Consejeros del Estado ejercerán sus funciones con arreglo a conciencia; en consecuencia, no obligarán con sus actos a la Administración.

UNDÉCIMA.—El Banco de España entregará al Tesoro público el importe de los billetes al portador emitidos con posterioridad al Decreto-ley de 19 de marzo de 1874, correspondientes a series retiradas o que se retiren de la circulación y no hayan sido presentados o no se presenten al cobro dentro de los siete años siguientes al acuerdo de su retirada de la circulación.

El importe de dichos billetes dejará de figurar en el pasivo del Banco; pero éste abonará por cuenta del Tesoro los que ulteriormente se presenten al cobro.

DUODÉCIMA.—El tipo de descuento de los efectos comerciales y el interés de las demás

operaciones del Banco se fijará por éste con la aprobación del Ministro de Hacienda, siendo potestativo de ambos promover su alteración.

Excepcionalmente, mientras el curso del cambio sobre el Extranjero carezca de estabilidad, o aun teniéndola se mantuviese con persistencia en términos que, a juicio del Gobierno, puedan ser peligrosos para la economía de la Nación, el Ministro de Hacienda, por acuerdo del Consejo de Ministros, podrá ordenar al Banco la elevación del tipo de descuento de los efectos comerciales y del interés en las demás operaciones.

DÉCIMOTERCERA.—Quedan derogadas las leyes de 4 de mayo de 1849, de 15 de diciembre de 1851, de 28 de enero de 1856 y 13 de mayo de 1902; el Decreto-ley de 19 de marzo de 1874; el Real decreto de 9 de agosto de 1898, y los Convenios de 2 de agosto de 1899 y 17 de julio de 1902; así como los Reales decretos de 10 de diciembre de 1900 y 5 de enero de 1901.

Los Estatutos y el Reglamento seguirán rigiendo interinamente en cuanto no se opongan a la presente ley, y serán substituídos por los Estatutos y Reglamento general que proponga el Banco y sean aprobados por Real decreto de S. M., siguiendo siempre los mismos trámites su futura modificación.

ART. 2.º *Régimen de la Banca privada.*— En relación con la Banca privada, se establece el régimen que se detalla en las bases siguientes:

PRIMERA.—Se establecerá en el Ministerio de Hacienda una Comisaría de Ordenación de la Banca privada, constituida por un Comisario regio, nombrado por el Gobierno por acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda, y un Consejo que se denominará Consejo Superior Bancario.

El Comisario regio de Ordenación de la Banca privada percibirá como únicos emolumentos legales la cantidad de 30.000 pesetas anuales en concepto de gratificación.

No obstante, cuando desempeñase la Comi-

saría un funcionario público, dichos emolumentos tendrán la condición legal de sueldo para todos los efectos jurídicos.

El Comisario regio no podrá recibir cantidad alguna en concepto de gastos de representación del Consejo Superior Bancario.

El Reglamento determinará las condiciones que han de concurrir en las personas que se designen para integrar el Consejo Superior Bancario.

SEGUNDA.—El Comisario regio tendrá la Presidencia del Consejo Superior Bancario, con facultad de suspender sus acuerdos, sometién-dolos en este caso a la resolución del Ministro, y autorizará con su firma los acuerdos del Consejo Superior Bancario.

TERCERA.—El Consejo estará integrado por un Vocal, nombrado por el Banco de España, con el carácter de Vicepresidente, quien desempeñará las funciones de Presidente en defecto de éste; por dos Vocales nombrados por cada una de las zonas bancarias, y uno nombrado

por la Junta Consultiva de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.

El funcionario del Consejo será determinado en el Reglamento.

CUARTA.—Corresponderá al Consejo Superior Bancario:

A) Formar la estadística bancaria española y extranjera establecida en España, con todos los elementos que puedan inducir al conocimiento general de la situación bancaria.

B) Proponer al Gobierno la forma en que deben establecerse y publicarse los balances de todos los Bancos y banqueros españoles, y Sucursales y Delegaciones de Bancos extranjeros establecidos o que se establezcan en España; publicación de balances, que habrá de hacerse dentro de los treinta días siguientes al de su fecha.

C) Fijar las normas a que deberá atemperarse en su actuación la Banca inscrita en la Comisaría. En tal virtud, le corresponde a ésta:

1.º Determinar por razón de su importan-

cia mercantil las plazas cuyos Bancos y banqueros puedan tener derecho a inscribirse en la Comisaría.

2.º Fijar el capital mínimo con que ha de contar cada Banco o banquero en relación con la plaza o plazas donde opere, para tener el referido derecho.

3.º Establecer la relación mínima que debe existir entre dicho capital, más los fondos de reserva y el volumen de las cuentas corrientes acreedoras de cada Banco o banquero, teniendo en cuenta la naturaleza del Banco y la índole especial de sus operaciones.

4.º Señalar el tipo máximo de interés aborable a las cuentas corrientes, imposiciones, bonos y demás conceptos similares.

5.º Determinar la proporcionalidad que debe haber entre el activo realizable y las obligaciones exigibles.

6.º Dictar aquellas disposiciones de carácter general que, sin menoscabo de la agilidad bancaria y de la peculiar manera de trabajar de cada uno de los Bancos y banqueros ins-

criptos, se estimen necesarias o convenientes para el interés público.

7.º Fijar los tipos y condiciones mínimas de intereses y comisiones en las operaciones bancarias exigibles, a su juicio, para la mayor estabilidad del crédito, sin que puedan ser indirectamente modificados por ninguna condición especial. No obstante, el Consejo Superior Bancario podrá autorizar variaciones en los tipos y condiciones en determinadas plazas, cuando así lo aconsejen circunstancias especiales debidamente justificadas.

En la aplicación de esta norma se observarán por el Consejo los siguientes preceptos:

a) Las condiciones se unificarán paulatinamente, y serán revisables en cualquier tiempo por el Consejo Superior Bancario.

b) Se procurará dotarlas de la mayor elasticidad posible, teniendo en cuenta las diferencias que existen entre las distintas plazas.

c) En ningún caso se aprobarán condiciones que signifiquen un trato peor para las ope-

raciones sobre valores del Estado con relación a las que recaigan sobre otros valores.

d) Las condiciones fijadas deberán de imprimirse y publicarse por toda la Banca, a fin de que resulten conocidas por los clientes.

e) Los Bancos que no la tengan establecida organizarán libremente la estadística del coste de las operaciones bancarias. El Consejo Superior Bancario podrá acordar las líneas directivas para este servicio estadístico, y reclamar de los Bancos datos y explicaciones sobre el coste de servicios determinados respecto a una o varias plazas.

Las normas que el Consejo acuerde y el Comisario regio sancione serán, mientras no sean derogadas o modificadas, de observancia obligatoria para toda la Banca inscrita, y su infracción podrá dar lugar, además de a las sanciones que en el Reglamento se establezcan, a la eliminación del infractor de la inscripción en la Comisaría, con pérdida de todos los derechos y ventajas que se enumeran en la base sexta.

Toda inspección que tenga que efectuarse en algún Banco o banquero inscrito para comprobar la inobservancia de algunas de las normas establecidas, se confiará precisamente al Banco de España.

El Consejo Superior Bancario podrá acordar la aplicación a la Banca operante, no inscrita en la Comisaría Regia, de todas o algunas de las normas anteriores, quedando en este caso convertidas en normas obligatorias para la Banca inscrita y la no inscrita.

Los Bancos oficiales continuarán siendo, a los efectos de estas disposiciones, elementos independientes del régimen de la Banca privada operante en España.

Las infracciones de cualquiera de las normas de observancia general acordadas por el Consejo Superior Bancario, bien para la Banca inscrita solamente, bien para toda la Banca, serán objeto de la adecuada sanción, que decretará el Comisario regio, previo estudio y propuesta, en cada caso particular, por el Consejo Superior Bancario.

Las sanciones aplicables serán:

- 1.^a Amonestación privada.
- 2.^a Censura comunicada a toda la Banca.
- 3.^a Multa de 500 a 25.000 pesetas.
- 4.^a Privación, por plazo máximo de un año, tratándose de Banca inscrita, de los derechos que a ésta confiera la legislación vigente. Las tres primeras sanciones podrán aplicarse a la Banca no inscrita, cuando infrinja normas que rijan para todos los establecimientos bancarios.

De toda sanción se dará cuenta, en el plazo de ocho días, al Ministro de Hacienda, ante el cual podrá recurrir el Banco que haya sido objeto de aquélla, previo depósito de su importe, si fuese pecuniaria. El Ministro deberá resolver estas aclaraciones en el plazo máximo de un mes; entendiéndose desestimadas cuando dicho término transcurriese sin que recayese acuerdo ministerial.

El importe de las multas ingresará en la Caja del Consejo Superior Bancario, a la resulta de la reclamación, si se formulare, y

una vez que fuere definitivo el acuerdo de imponerlas, ingresará en el Tesoro.

D) Informar al Ministro de Hacienda ex los recursos de alzada sobre admisión de valores a la cotización.

E) Proponer al Gobierno medidas circunstanciales que proceda adoptar en cuanto se relacione con la política monetaria y con la actuación de Sociedades de crédito, Bancos y Banqueros que funcionen en España.

F) Evacuar los informes que a su consulta someta el Ministro, y de un modo especial los previstos en las bases segunda y novena del artículo 1.º de esta ley.

G) Designar los tres Consejeros para el Banco de España, de acuerdo con lo prevenido en la base décima del artículo 1.º de esta ley.

QUINTA.—a) Se procederá a la división de Zonas bancarias, constituídas por los Bancos y Banqueros domiciliados dentro de cada una, con arreglo a las normas que establecerá el Consejo.

En la capitalidad de cada Zona podrá establecerse una Caja de Compensación entre los Bancos y Banqueros inscritos.

b) Cada Zona bancaria nombrará dos Vocales para el Consejo, pudiendo designar dos suplentes que los substituyan en sus funciones eventualmente.

SEXTA.—La inscripción en la Comisaría será voluntaria, y sólo podrán pertenecer a la misma los Bancos y Banqueros españoles.

Quedarán reservados a los Bancos y Banqueros inscritos los siguientes beneficios:

a) Régimen de bonificación en las operaciones que realicen con el Banco de España, de acuerdo con lo previsto en la base octava del artículo 1.º de esta ley.

b) Facultad para concertar con el Estado un régimen especial para el establecimiento del cheque cruzado y del cheque de viaje, y para obtener un concierto para el impuesto del Timbre sobre cheques y talones.

A los efectos del establecimiento de los servicios que competen a la organización de la

Banca privada, a tenor de lo dispuesto en esta base, se autoriza al Gobierno:

1.º Para eximir del Timbre del Estado los cheques y demás mandatos de pago a que se refiere el artículo 541 del Código de Comercio, cuando fueren cruzados en la forma prescrita en el párrafo primero de dicho artículo; y

ARTÍCULO 541 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

El librador o cualquiera tenedor legal de un mandato de pago, tendrá derecho a indicar en él que se pague a banquero o Sociedad determinada, lo cual expresará escribiendo cruzado en el anverso el nombre de dicho banquero o Sociedad, o solamente las palabras "y Compañía".

El pago hecho a otra persona que no sea el banquero o Sociedad indicada, no relevará de responsabilidad al librado si hubiese pagado indebidamente.

2.º Para exceptuar del Timbre del Estado el acto en cuya virtud, en la aceptación de

las letras de cambio, se indique algún Banco o Banquero inscrito en la Comisaría a que se refiere esta base, como pagador del documento, siempre que el pago se realice mediante compensación, con sujeción estricta a las formas que para ella se establezcan. La institución compensadora estará obligada a conservar, a disposición de los funcionarios Inspectores del impuesto, por el tiempo que reglamentariamente se determine, relación autorizada de las letras compensadas a que se refiere este número.

En los cheques pagados por compensación realizada en alguna de las instituciones establecidas a este fin por el Consejo Superior Bancario, el signo y la fórmula que expresen haberse efectuado aquélla con las formalidades prescritas para el régimen de la institución, substituirá legalmente al "recibí" y a la firma prescrita en el párrafo segundo del artículo 539 del Código de Comercio.

ARTÍCULO 539 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

El pago del mandato se exigirá al librado en el acto de la presentación.

La persona a quien se pague expresará en el recibí su nombre y la fecha del pago.

SÉPTIMA.—Para atender a todos los gastos que implique el funcionamiento del Consejo Superior Bancario, se establecerá un arbitrio anual, que fijará el propio Consejo, y que no podrá exceder de un cuarto por 1.000 sobre el capital desembolsado y reservas de los Bancos, y de medio por 1.000 sobre el capital que los Banqueros tengan computado como afecto a su negocio bancario, en relación con lo determinado en el número 3.º de la letra C) de la base cuarta del artículo 2.º de esta ley.

Este arbitrio será satisfecho por anualidades anticipadas por los Bancos y Banqueros que se inscriban en la Comisaría, y será administrado libremente por el Consejo Superior Bancario.

OCTAVA.—En lo sucesivo, nadie podrá usar la denominación de Banco o Banquero sin autorización del Ministro de Hacienda, previo informe del Consejo Superior Bancario, que habrá de referirse a los dos siguientes extremos:

1.º Si las operaciones que el solicitante se propone realizar son o no genuinamente bancarias; y

2.º Si cuenta con medios propios para realizar dichas operaciones.

El Consejo Superior Bancario podrá solicitar del Gobierno que determinadas Sociedades o personas que usan públicamente el nombre de Banco o Banquero se sometan, con audiencia de sus representantes, al informe del Consejo Superior Bancario, respecto a la adecuación o no adecuación del nombre de Banco o Banquero. De igual modo podrá solicitar que cualquiera persona o entidad que se dedique habitualmente a operaciones bancarias, quede sometida a las normas a que está sujeta la Banca privada no inscrita.

El uso público en España, para súbditos o Sociedades extranjeras, de la denominación de Banco o Banquero para sus negocios, podrá condicionarse, en cada caso particular, por el Gobierno de Su Majestad, habida cuenta de los Tratados internacionales y del principio de reciprocidad, previo informe del Consejo Superior Bancario.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

El Ministro de Hacienda dictará el Reglamento para el desenvolvimiento y aplicación de esta ley, en el que se incluirá la ordenanza para el ejercicio de las funciones de carácter penal concedidas al Comisario regio.

Madrid, 24 de enero de 1927.—Aprobado por S. M.—El Ministro de Hacienda, *José Calvo Sotelo*.

Artículos de la Ley de 26 de noviembre de 1931 que no modifican ninguno de los de la Ordenación Bancaria.

ART. 11 Si al establecer el patrón oro el precio legal base asignado al kilo de metal fino fuese superior a 3.444,44 pesetas, se evaluarán al nuevo tipo las reservas de oro del Banco de España en la fecha en que el nuevo patrón deba comenzar a regir, y se asignará al Estado, desde igual fecha, la diferencia en más del valor de aquellas reservas. Los créditos en oro que el Banco tenga contra el Tesoro se entenderán vencidos en el referido día, sin que obsten en contrario las condiciones legales o contractuales en que aquéllos se contrajeron.

ART. 12. El Banco de España, inmediatamente de ser promulgada esta ley, procederá a revisar sus Estatutos y Reglamentos para ponerlos en armonía con las disposiciones legales, y los someterá a la aprobación del Ministro de Hacienda.

ART. 13. Se autoriza al Ministro de Hacienda para publicar un nuevo texto refundido de la ley de Ordenación bancaria.

ARTÍCULO ADICIONAL. La presente ley entrará en vigor desde la fecha de su publicación en la *Gaceta*.

REAL DECRETO

APROBANDO EL REGLAMENTO PARA CUMPLIMIENTO
DE LA LEY DE ORDENACIÓN BANCARIA

NÚM. 364. — A propuesta del Ministro de Hacienda, vengo en aprobar el siguiente Reglamento para cumplimiento de la ley de Ordenación bancaria, texto refundido de 24 de enero de 1927, por el cual se ha de regir el Consejo Superior Bancario con carácter provisional, hasta que reunido el Consejo de Estado en pleno se dicte el definitivo.

Dado en Palacio a ocho de febrero de mil novecientos veintisiete.

ALFONSO

El Ministro de Hacienda,
JOSÉ CALVO SOTELO.

REGLAMENTO

para el cumplimiento de la disposición transitoria bancaria, texto refundido de 24 de enero de 1927.

SECCION PRIMERA

DE LA BANCA PRIVADA EN GENERAL

ARTÍCULO 1.º La Banca privada en España está integrada por todos los Bancos y Banqueros no oficiales, cualquiera que sea la forma de su constitución jurídica y la nacionalidad de las leyes de su creación, que se dediquen en territorio español a efectuar las operaciones bancarias. No forman parte de la Banca española las Cajas de Ahorro sometidas al protectorado del Gobierno.

ART. 2.º Son Bancos y Banqueros privados españoles:

1.º Los constituidos con arreglo a la legislación española, domiciliados en España, que

desde la fecha de la ley de Ordenación bancaria estuvieren adscritos a una de las tres Asociaciones bancarias del Norte, de Barcelona y Centro de España.

2.º Lo son asimismo los Bancos y Banqueros españoles que estén regidos exclusivamente por las leyes de España.

A este fin, serán consideradas españolas las Sociedades bancarias:

a) Tratándose de Sociedades regulares colectivas, cuando posean dicha nacionalidad la mayoría de los socios y corresponda exclusivamente a quienes se hallen en ese caso la gestión de los negocios sociales.

b) Tratándose de Sociedades comanditarias simples o comanditarias por acciones, cuando concurren respecto a los socios colectivos y a la gerencia las circunstancias exigidas en el apartado anterior y las participaciones en comandita, representadas o no por acciones, pertenezcan a españoles en su mayor parte.

c) Tratándose de Sociedades anónimas,

cuando figuren inscritas a nombre de españoles las dos terceras partes, por lo menos, de sus acciones y sean españoles el presidente y las dos terceras partes de los individuos del Consejo de Administración.

Tratándose de acciones al portador, la Sociedad deberá justificar que las dos terceras partes de las mismas son propiedad de españoles y ofrecer los medios de comprobación necesarios para conocer las transmisiones que puedan afectar a la propiedad de estas acciones. Corresponde al Consejo Superior Bancario la facultad de exigir esta justificación, y a los Bancos la obligación de prestarla en los casos particulares que, a juicio del Consejo Superior Bancario, lo requiera.

ART. 3.º Serán considerados como Bancos extranjeros aquellos que, aun estando domiciliados en España y creados con arreglo a las leyes españolas, se hallen ya, o desde que se hallaren, en uno de estos casos:

- a) Que todos o la mayoría de los puestos

directivos estén desempeñados por ciudadanos extranjeros.

b) Celebren sus juntas fuera de España; y

c). Sin encontrarse taxativamente en alguno de los casos anteriores, estén en relación notoria de dependencia directa respecto a un Banco o Empresa extranjera.

ART. 4.º Corresponde al Consejo Superior Bancario resolver cuantas dudas puedan ocurrir acerca de la condición española o extranjera de los Bancos y Banqueros que realicen en España operaciones bancarias.

ART. 5.º En lo sucesivo nadie podrá usar la denominación de Banco o Banquero sin autorización del Ministro de Hacienda, previo informe del Consejo Superior Bancario, que habrá de referirse a los dos siguientes extremos:

1.º Si las operaciones que el solicitante se propone realizar son o no genuinamente bancarias.

2.º Si cuenta con medios propios para realizar dichas operaciones.

El Consejo Superior Bancario podrá solicitar del Gobierno que determinadas Sociedades o personas que usan públicamente el nombre de Banco o Banquero se sometan, con audiencia de sus representantes, al informe del Consejo Superior Bancario respecto a la adecuación o no adecuación del nombre de Banco o Banquero. De igual modo podrá solicitar que cualquiera persona o entidad que se dedique habitualmente a operaciones bancarias quede sometida a las normas a que está sujeta la Banca privada no inscrita.

El uso público en España por súbditos o Sociedades extranjeras de la denominación de Banco o Banquero para sus negocios, podrá condicionarse en cada caso particular por el Gobierno de S. M., habida cuenta de los Tratados internacionales y del principio de reciprocidad, previo el informe del Consejo Superior Bancario.

El Consejo Superior Bancario procederá desde luego a clasificar toda la Banca operante en España, con arreglo a su nacionalidad. Pc-

drá adoptar además otras normas de clasificación, tales como la forma de su constitución jurídica, la naturaleza predominante de sus operaciones, la localización geográfica, etcétera, ateniéndose para hacer la clasificación, no sólo a lo que resulte de los respectivos Estatutos e inscripciones en el Registro Mercantil, sino también a lo que conste respecto a la dirección práctica y cierta que cada Banco o Banquero imprima a sus operaciones.

SECCION SEGUNDA

DEL RÉGIMEN DE LA BANCA PRIVADA

ART. 6.º Toda la Banca privada, nacional o extranjera, operante en España está sometida a la publicación obligatoria de sus balances y del extracto de su cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Los balances se elevarán trimestralmente a la Comisaría, con arreglo al modelo que aprueba el Gobierno, a propuesta del Consejo Superior Bancario. El extracto de la cuenta de

Pérdidas y Ganancias se remitirá anualmente.

Los balances y extracto de la cuenta de Pérdidas y Ganancias de los Bancos y Banqueros extranjeros se contraerán, respectivamente, a la situación y a los resultados de sus negocios en España; los de los Bancos y Banqueros españoles reflejarán la situación y el resultado de sus operaciones.

ART. 7.º Dictará el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, las medidas previstas por la ley de Ordenación bancaria para la Banca no inscrita en la Comisaría. Al Consejo Superior Bancario incumbe en este respecto una labor de información y consejo.

ART. 8.º La Banca inscrita en la Comisaría tendrá, además de los deberes de toda la Banca, los siguientes:

1.º Cumplir lealmente las normas dictadas, dentro de sus atribuciones, por el Consejo Superior Bancario y atender con el mejor espíritu sus indicaciones.

2.º Aceptar y someterse a las sanciones que acuerde el Consejo Superior Bancario y

apruebe el Comisario en caso de incumplimiento de las normas establecidas.

3.º Someterse a la inspección del Banco de España a que se refiere la sección décima de este Reglamento.

4.º Evacuar las consultas que el Consejo Superior Bancario pueda someter a su estudio.

5.º Atender a los gastos que implique el funcionamiento ordinario del Consejo Superior Bancario mediante el pago de un arbitrio anual fijado por el propio Consejo, sin exceder de $1/4$ por 1.000 sobre el capital, más reservas de cada Banco, y $1/2$ por 1.000 sobre el capital que cada Banquero tenga computado como afecto a su negocio bancario, en relación con la base séptima del artículo 2.º de la ley.

El arbitrio será satisfecho por anualidades anticipadas.

ART. 9.º La Banca inscrita disfrutará de los derechos y beneficios siguientes:

1.º Derechos de sufragio activo y pasivo

para la constitución del Consejo Superior Bancario en la forma y con los requisitos que se establezcan con arreglo al apartado segundo del artículo 19 de este Reglamento.

2.º Participar en el régimen de bonificación que el Banco de España concede a tenor de la base octava del artículo 1.º de la ley de Ordenación, y según se detalla en la Sección décima de este Reglamento.

3.º Participación en las facilidades y beneficios que se contengan en el concierto con el Estado para el establecimiento del cheque cruzado y de viaje.

4.º Participación en las facilidades y beneficios del concierto con el Estado del impuesto del timbre sobre cheques, talones y entregas.

Los conciertos a que se refieren los apartados tercero y cuarto se incorporarán, cuando se celebren, a este Reglamento como partes integrantes del mismo y constituirán su Sección duodécima.

5.º Formar parte de la Cámara de Com-



pensación. Cada Banco o Banquero podrá ser miembro de la Cámara establecida en la Zona bancaria de su residencia, y podrá presentar en ella directamente los cheques, letras y otros documentos compensables de los que sea pagador o cobrador, con los derechos y obligaciones que se contengan en los Estatutos o Reglamento de la misma.

6.º Participación en el disfrute de los servicios que organice el Consejo Superior Bancario, tales como Asesoría, informes comerciales, publicaciones y bibliotecas.

ART. 10. A los efectos de la base cuarta de la ley de Ordenación, se entenderán definidos de la siguiente manera los términos bancarios que en aquella base se emplean.

Se considerará capital:

a). Respecto a las Sociedades anónimas:

1.º El capital desembolsado y el importe de sus reservas, cualquiera que sea la denominación con que figuren en los balances. El importe de estos dos factores se computará por todo su valor.

2.º El capital suscrito y no desembolsado respecto a acciones que no hayan perdido o pierdan su condición de nominativas y hasta el límite máximo de una cantidad igual a la desembolsada a cuenta de dicho capital por cada acción. Este capital así determinado se computará por la mitad de su importe.

b). Respecto a las Sociedades colectivas o comanditarias y Banqueros:

1.º El capital social aportado al negocio y el importe de sus reservas, cualquiera que sea la denominación con que figuren en sus balances. El importe de estos dos factores se computará por todo su valor.

2.º El capital que expresa y voluntariamente declara el socio o socios colectivos en bienes cuya propiedad justifiquen y hasta el límite máximo de una cantidad igual a la que el mismo o los mismos socios hubieren aportado oficialmente. Este capital, así determinado, se computará por la mitad de su importe.

La fijación de los capitales correspondientes a cada Banco o Banquero inscrito se hará por

la Comisaria, al terminar cada año, con referencia al último balance.

La fijación del interés máximo en las cuentas corrientes acreedoras se hará por el Consejo Superior Bancario, distinguiendo los casos de cuentas corrientes a la vista y a diversos plazos, y señalando el interés en relación con el plazo.

Cuando las operaciones de cuenta corriente practicadas por los Bancos se diferencien entre sí por la duración del período de liquidación y acumulación de intereses, o por estar asociadas a ventajas y facilidades particulares, el Consejo Superior Bancario en cada caso estimará las consecuencias de los diversos períodos de acumulación y de las ventajas o facilidades otorgadas, y las expresará en términos de interés.

Sobre tipos y condiciones mínimas de intereses y comisiones en las operaciones bancarias se observarán por el Consejo los siguientes preceptos:

- a). Las condiciones se unificarán paulatina-

mente, y serán revisables en cualquier tiempo por el Consejo Superior Bancario.

b). Se procurará dotarlas de la mayor elasticidad posible, teniendo en cuenta las diferencias que existen entre las distintas plazas.

c) En ningún caso se aprobarán condiciones que signifiquen un trato peor para las operaciones sobre valores del Estado con relación a las que recaigan sobre otros valores.

d) Las condiciones fijadas deberán imprimirse y publicarse por toda la Banca, a fin de que resulten conocidas por los clientes.

e) Los Bancos que no la tengan establecida organizarán libremente la estadística del coste de las operaciones bancarias. El Consejo Superior Bancario podrá acordar las líneas directivas para este servicio estadístico y reclamar de los Bancos datos y explicaciones sobre el coste de servicios determinados respecto a una o varias plazas.

Por activo realizable se entenderá la existencia en caja, el saldo a la vista en el Banco de España o en otros establecimientos de cré-

dito, los créditos disponibles a la vista, los valores realizables o pignorables y efectos de comercio a plazo no mayor de noventa días, y los créditos transferibles cuyo plazo de vencimiento no exceda de noventa días.

Por pasivo exigible se entenderán los saldos de las cuentas corrientes acreedoras, imposiciones, bonos y demás conceptos similares.

En la determinación de las normas de observancia obligatoria para la Banca inscrita en la Comisaría, el Consejo Superior Bancario procederá gradual y continuamente, aceptando provisionalmente como bueno el *statu quo* de cada Banco o banquero, solicitando su modificación en vista de la observación a que debe tenerle sometido, y debiendo quedar dentro de dichas normas en el plazo que se fije por el Consejo Superior Bancario, que no podrá exceder de tres años.

El Consejo Superior Bancario podrá acordar la aplicación a la Banca operante, no inscrita en la Comisaría Regia, de todas o alguna de las normas a que se refiere el apartado C)

de la base cuarta del artículo 2.º de la ley de Ordenación, quedando en este caso convertidas en normas obligatorias para la Banca inscrita y la no inscrita.

Los Bancos oficiales continuarán siendo, a los efectos de estas disposiciones, elementos independientes del régimen de la Banca privada operante en España.

Las infracciones de cualquiera de las normas de observancia general acordadas por el Consejo Superior Bancario, bien para la Banca inscrita solamente, bien para toda la Banca, serán objeto de la adecuada sanción, que decretará el Comisario regio, previo estudio y propuesta en cada caso particular por el Consejo Superior Bancario.

Las sanciones aplicables serán:

- 1.ª Amonestación privada.
- 2.ª Censura, comunicada a toda la Banca.
- 3.ª Multa de 500 a 25.000 pesetas.
- 4.ª Privación, por plazo máximo de un año, tratándose de Banca inscrita, de los derechos que a ésta confiere la legislación vigente.

Las tres primeras sanciones podrán aplicarse a la Banca no inscrita cuando infrinjan normas que rijan para todos los Establecimientos bancarios.

De toda sanción se dará cuenta en el plazo de ocho días al Ministro de Hacienda, ante el cual podrá recurrir el Banco que haya sido objeto de aquélla, previo depósito de su importe si fuese pecuniaria. El Ministro deberá resolver estas reclamaciones en plazo máximo de un mes, entendiéndose desestimadas cuando dicho término transcurriese sin que recayere acuerdo ministerial.

El importe de las multas ingresará en la Caja del Consejo Superior Bancario, a la resulta de la reclamación, si se formulare, y una vez que fuere definitivo el acuerdo de imponerlas, ingresará en el Tesoro.

El ejercicio de las funciones de carácter penal que se conceden al Comisario regio se acomodará a lo que se preceptúa en el artículo 16 de este Reglamento.

SECCION TERCERA

DE LA COMUNIDAD BANCARIA ESPAÑOLA Y DE SU REPRESENTACIÓN

ART. 11. El Consejo Superior Bancario es el órgano de regulación y de representación de todos los Bancos y banqueros inscritos en la Comisaría. Lo será también de toda la Banca privada en el desempeño de las tareas que, siendo propias del Gobierno, reciba de éste en delegación. El Consejo Superior Bancario, como persona jurídica creada por la ley, tiene capacidad para la realización de todos los actos y la persecución de todos los fines explícitos o implícitos en el régimen de ordenación de la Banca privada española. La duración de la vida de esta persona depende de la ley. Si la comunidad bancaria representada por el Consejo Superior Bancario poseyera en el momento de su disolución legal bienes o valores, se aplicarían éstos a los Bancos o banqueros inscritos en la proporción de las

cuotas que para el sostenimiento de la Comisaría hubiesen venido pagando en los dos últimos años.

ART. 12. El ingreso de un Banco o banquero español en esta comunidad bancaria se realiza por la inscripción en la Comisaría, y es libre y voluntario. Los Bancos y Banqueros inscritos habrán de reunir las condiciones exigidas al efecto por la ley de Ordenación y por este Reglamento. La inscripción se solicitará por escrito del Comisario, quien presentará la solicitud a la decisión del Consejo Superior Bancario.

ART. 13. La separación de la comunidad, después de haber participado del régimen de derechos y deberes de la Banca inscrita, puede ser voluntaria y forzosa y estará sometida a las condiciones siguientes:

El socio que voluntariamente se separe de la comunidad queda obligado a garantizar, a satisfacción del Consejo Superior Bancario, el cumplimiento de las obligaciones que pudieran tener pendientes respecto a la misma; la

separación voluntaria no podrá ser motivo para eludir una inspección ya acordada o que se hallare en tramitación o que estuviese sometida a la deliberación del Consejo. Si los Bancos que se separen tuvieran un Vocal en el Consejo Superior Bancario cesará éste *ipso facto* en su función de Consejero. No será devuelta al Banco que se separe parte alguna de las cuotas que hubiese satisfecho al Consejo Superior Bancario.

ART. 14. La separación forzosa será fundada y habrá de acordarse por el Consejo Superior Bancario como consecuencia de la infracción de alguna de las normas por él establecidas en circunstancias que, en opinión del Consejo Superior Bancario, revistan al hecho de una notoria gravedad. El Comisario suspenderá la publicación del acuerdo de separación forzosa hasta que el Ministro de Hacienda le haya prestado su conformidad.

ART. 15. Las normas que dicte el Consejo Superior Bancario tendrán carácter de generalidad, salvo en casos excepcionales de eviden-

te justificación, a juicio del propio Consejo Superior Bancario.

Todo Banco o Banquero puede pedir la revisión ante el Consejo Superior Bancario de un acuerdo que se base en error de hecho, compareciendo personalmente a explicarlo y demostrarlo.

ART. 16. El ejercicio de las funciones que se conceden al Comisario regio de la Banca privada en la base cuarta, apartado C), se acomodará a los preceptos que siguen:

A. *La instrucción de expedientes.* — La comprobación de haberse infringido una norma declarada por el Consejo Superior Bancario obligatoria para toda la Banca operante en España, será objeto de un expediente reservado instruido por el Comisario regio de la Banca, actuando como Secretario el del Consejo Superior Bancario.

La apertura de un expediente habrá de basarse en una resolución motivada del Comisario regio, y deberá ser acordada cuando la infracción haya sido comunicada en escrito fir-

mado por personas de arraigo o en forma confidencial revestida, a juicio del Comisario, de caracteres verídicos. El Comisario regio de la Banca privada podrá exigir caución a las personas o entidades que lo exciten por escrito o de palabra para la instrucción de un expediente, y podrá rechazar de plano las denuncias y comunicaciones que a su juicio no merezcan ser tomadas en consideración. La caución se constituirá en el lugar y forma que ordene el Comisario regio, subordinándose la devolución o no de su importe a que respectivamente resulte cierta o se compruebe que es falsa la denuncia. En caso de falsedad, el importe de la caución quedará en beneficio del Consejo, después de atender a reembolsar los gastos que se le hayan ocasionado en la instrucción del expediente.

B. *Audiencia obligatoria del presunto infractor ante el Comisario.*—En todo expediente será necesariamente oído el presunto infractor, y se le concederá un plazo prudencial para dar ante el Comisario las explicaciones debi-

das, firmando en este caso el acta que se levantará de su declaración. Si no comparece se entenderá que desiste de este derecho.

C. *Libertad en las formas procesales y en las pruebas.*—En la instrucción y substanciación de estos expedientes, el Comisario regio ordenará la práctica de cuantas diligencias le sugiera su celo y reclamará los asesoramientos e informes que considere convenientes o necesarios. Serán hábiles todos los días y horas; podrán practicarse las diligencias en Madrid o en cualquier plaza de provincias, y constará en el expediente, para agravar la sanción, los actos de rebeldía o resistencia que pudiera ofrecer el presunto infractor.

D. *De la conclusión del expediente.*—En el más breve plazo posible, el expediente se dará por concluso por resolución motivada del Comisario, en la que acordará en mérito de lo que de él resulte, o el archivo del expediente sin haber lugar a ulteriores enjuiciamientos o que pase el hecho a conocimiento del Consejo Superior Bancario, para que en el día y hora

que se señalen delibere y proponga el fallo requerido por el caso, formándose al efecto por el Secretario un extracto del expediente, en el cual estarán omitidas las menciones personales y referencias documentales que, por razón de secreto profesional u otros motivos delicados, entienda el Comisario regio deban permanecer irreveladas ante el Consejo. La resolución del Comisario será notificada al presunto infractor, y cuando proceda, a las personas que hubieran comunicado la infracción a la Comisaría.

E. *De la deliberación del Consejo Superior Bancario.*—Convocado el Consejo Superior Bancario para proponer el fallo de un expediente, se comenzará por la lectura que hará el Secretario actuario del extracto del mismo; podrán los Consejeros pedir las explicaciones y aclaraciones que estimen pertinentes y acordar la práctica, para mejor proveer, de nuevas diligencias, que se realizarán en el más breve plazo posible. El Banco o Banquero a que el expediente se refiera podrá, si previamente lo

pidiera por escrito o de palabra, comparecer ante el Consejo para ser oído.

F. *Votación de hechos probados.*—Agotada la deliberación, procederá el Consejo, primeramente y en la forma de votación secreta que determine, a resolver por mayoría absoluta de votos si se considera o no probada la infracción.

En el último caso será archivado el expediente sin ulterior recurso.

G. *Votación de la sanción aplicable.*—Cuando de la votación a que se refiere el artículo anterior resulte, en opinión del Consejo, probada la infracción, se procederá en segunda votación secreta, en la forma que el Consejo acuerde, a fijar la sanción que deba ser aplicada al infractor.

Las sanciones aplicables serán:

- 1.^a Amonestación privada.
- 2.^a Censura comunicada a toda la Banca.
- 3.^a Multa de 500 a 25.000 pesetas, que se considerará dividida en tres grados, a saber:

el primero, hasta 8.000 pesetas; el segundo, hasta 16.000, y el tercero, hasta 25.000.

4.^a Privación por plazo máximo de un año, tratándose de Banca inscrita, de los derechos que a ésta confiere la legislación vigente.

Las sanciones anteriores forman, en el orden que se mencionan, una escala de menor a mayor gravedad.

La sanción aplicable será la que obtenga mayoría absoluta de votos. Si ninguna tuviera esta mayoría, se aplicará la que resulte operando del modo siguiente: los votos de la sanción más grave se sumarán a los que haya obtenido la más próxima que le siga en gravedad, como si aquéllos fueran del mismo menor rigor que éstos, y si de esta manera resultara mayoría, se aplicará esta segunda y menor sanción. De no obtenerse así una mayoría de votos, la suma de aquellos dos grupos de votos se totalizará con los que haya obtenido la sanción más próxima que siga en gravedad al segundo, como si los votos de aquellos dos primeros grupos fueran de la misma naturaleza

que los de esta tercera. El procedimiento se repetirá hasta llegar a una sanción que de esta manera cuente con mayoría de votos.

El resultado de las dos votaciones se consignará en acta.

H. *Del señalamiento de la sanción por el Comisario.*—El Comisario regio de la Banca privada, dentro del plazo de seis días en el ejercicio de las funciones que le concede el Real decreto de 25 de mayo de 1926, señalará la sanción que corresponda.

I. *Recurso ante el Ministro de Hacienda.*—En el plazo de ocho días, el Comisario regio de la Banca privada dará cuenta al Ministro de Hacienda de la sanción aplicada, para que, a tenor del artículo 2.º del Real decreto de 25 de mayo de 1926, pueda recurrir de ella el Banco que haya sido objeto de la sanción, previo depósito de su importe si fuera pecuniaria, ingresándolo en la Caja del Consejo Superior Bancario a las resultas de la reclamación, y una vez que fuera definitivo el acuerdo de imponerla, ingresará en el Tesoro.

ART. 17. Cuando a juicio del Consejo Superior Bancario haya motivo bastante para suponer que un asociado ha infringido alguna de las normas por él establecidas, podrá pedir al Banco de España gire una visita de inspección con el fin de comprobarla.

SECCION CUARTA

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR BANCARIO

ART. 18. En el ejercicio de sus funciones, respecto a toda la Banca privada, el Consejo Superior Bancario posee las atribuciones siguientes:

1.^a Proponer al Gobierno, en cualquier tiempo, la forma y modelo para la publicación de los balances y del extracto de cuenta de Pérdidas y Ganancias de todos los Bancos operantes en España.

2.^a Proponer al Gobierno medidas circunstanciales que proceda adoptar en cuanto se relacione con la política monetaria y con la actuación de las Sociedades de crédito, Bancos y banqueros que funcionen en España.

3.ª Recoger las costumbres y usos mercantiles por localidades o plazas, a los efectos del artículo 2.º del Código de Comercio.

4.ª Proponer al Gobierno, por conducto del Ministro de Hacienda, los preceptos que estime convenientes sobre operaciones mercantiles no incluidas expresamente en el Código de Comercio.

5.ª Informar al Ministro de Hacienda en los recursos de alzada sobre admisión de valores en Bolsa.

6.ª Evacuar los informes que a su consulta someta el Ministro de Hacienda arregladamente a la Sección novena de este Reglamento.

7.ª Llevar el Registro de toda la Banca operante en España.

El Consejo Superior Bancario será el órgano encargado de la elaboración y publicación de la estadística bancaria española.

ART. 19. En el ejercicio de sus funciones, respecto a la Banca inscrita en la Comisaria, compete al Consejo Superior Bancario:

1.º Practicar o revisar la división en zonas bancarias del territorio español.

2.º Establecer o revisar las normas para el procedimiento electoral.

3.º Designar a los tres Vocales banqueros que habrán de representar al Consejo Superior Bancario en el Consejo del Banco de España, habiendo de recaer los nombramientos en personas que, perteneciendo o no al Consejo Superior Bancario, tengan la cualificación que más adelante se exige como tales a los Vocales del Consejo Superior Bancario.

4.º Determinar la capitalidad de cada zona bancaria.

5.º Acordar la creación de Cámaras de Compensación.

6.º Organizar servicios de estadística, oficinas de estudio, bibliotecas y otros que le permitan sus recursos.

7.º Señalar el tipo máximo de interés abordable a las cuentas corrientes, imposiciones, bonos y demás conceptos similares.

8.º Concertar con el Estado un régimen es-

pecial para el establecimiento del cheque cruzado y del cheque de viaje, y para el impuesto del timbre sobre los cheques, talones y entregas en cuentas corrientes.

9.º Formación y aprobación de sus presupuestos anuales y de sus cuentas.

10. Recaudar sus ingresos y realizar sus gastos.

11. Señalar a cada Banco o banquero la cuantía de su cuota anual, para atender a los gastos ordinarios del Consejo.

12. Administrar libremente sus fondos.

13. Convertir en acuerdos las medidas que reputé convenientes para fortalecer la concentración y distribución bancaria; fortalecer la inmunidad de sus asociados contra las perturbaciones extraordinarias en los negocios, y afirmar la coherencia en el movimiento económico bancario entre la Banca privada y el Banco de emisión.

14. Cualesquiera otras atribuciones que sean conferidas al Consejo por otros preceptos de este Reglamento.

ART. 20. Se exigirá la concurrencia de las dos terceras partes de los Consejeros y la mayoría de los votos efectivos para la validez de los siguientes acuerdos del Consejo Superior Bancario:

a) Proponer al Gobierno, en cualquier tiempo, la forma y modelo para la publicación de los balances y del extracto de la cuenta de Pérdidas y Ganancias de todos los Bancos operantes en España.

b) Proponer al Gobierno medidas circunstanciales que proceda adoptar en cuanto se relacione con la política monetaria y con la actuación de Sociedades de crédito, Bancos y Banqueros que funcionen en España,

c) Recoger las costumbres y usos mercantiles por localidades o plazas, a los efectos del artículo 2.º del Código de Comercio.

ARTÍCULO 2.º DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los ejecuten, y estén o no especificados en este Código, se regirán por las dispo-

siciones contenidas en él; en su defecto, por los usos del comercio observados generalmente en cada plaza, y a falta de ambas reglas, por las del Derecho común.

Serán reputados actos de comercio los comprendidos en este Código y cualesquiera otros de naturaleza análoga.

d), Practicar o revisar la división en zonas bancarias del territorio español.

e) Establecer o revisar las normas para el procedimiento electoral.

f) Designar a los tres Vocales Banqueros que habrán de representar al Consejo Superior Bancario en el Consejo del Banco de España.

g). Señalar el tipo máximo de interés abonable a las cuentas corrientes, imposiciones, bonos y demás conceptos similares.

h). Acordar la aplicación a la Banca operante no inscrita en la Comisaría Regia de todas o algunas de las normas anteriores, quedando en este caso convertidas en normas

obligatorias para la Banca inscrita y la no inscrita.

SECCION QUINTA

DE LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR BANCARIO Y DE LAS CONDICIONES DE LOS CARGOS

ART. 21. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.º de la ley, en sus bases segunda y tercera, el Consejo estará presidido por el Comisario regio de la Banca privada, nombrado por el Gobierno, y será integrado por un Vocal nombrado por el Banco de España, con carácter de Vicepresidente, que desempeñará las funciones de Presidente en defecto de éste; por dos Vocales nombrados por cada una de las zonas bancarias y uno nombrado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Formarán asimismo parte del Consejo Superior Bancario los Vocales adjuntos, que, en proporción de dos por cada zona, serán nombrados por éstas, los cuales, para mayor acierto y garantía de los acuerdos que adopte el

Consejo, tendrán todos los derechos de los Vocales en propiedad, menos el del voto. El Consejo podrá conferir la condición de Consejero honorario, a título puramente honorífico, a personas que hubieren prestado a la Banca española servicios eminentes.

El Consejero que cese en el cargo en consideración al cual fué nombrado Vocal del Consejo Superior Bancario cesará también en su puesto del Consejo Superior Bancario. Los Consejeros adjuntos suplirán a los Consejeros en propiedad; la suplencia de los Vocales en propiedad de una zona corresponderá a los adjuntos de la misma zona, y en el acta de cada sesión constará a cuál Vocal en propiedad ausente suple cada Vocal adjunto; todos los Vocales serán españoles y mayores de edad. Los Vocales adjuntos tendrán voto cuando actúen supliendo a un Vocal en propiedad.

ART. 22. El Vocal nombrado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio será persona caracterizada por su conocimiento de los negocios españoles; percibirá las dietas por

sesión que marca la sección undécima, y el cargo tendrá la duración de tres años, siendo reelegible.

ART. 23. El Vocal nombrado por el Banco de España será Subgobernador o Consejero del mismo, y el nombramiento se hará por el Banco y para la duración de tres años, siendo reelegible.

Los Vocales que representen al Consejo Superior Bancario en el Banco de España serán nombrados por tres años.

Los Vocales que representen por zonas a la Banca inscrita habrán de desempeñar puestos en la alta dirección o en el Consejo de Administración de alguno de los Bancos o banqueros afiliados. Su nombramiento se acomodará a lo que se disponga por el Consejo Superior Bancario, en virtud del apartado segundo del artículo 19; recibirán como dietas por sesión y como gastos de viaje las cantidades que se determinen. Los cargos durarán tres años y podrán ser reelegibles. Un mismo Vocal no podrá tener en el Consejo más de

una representación ni más de un voto. Cada tres años cesarán los Vocales efectivos, pasando a ocupar sus puestos los adjuntos, procediéndose a elegir nuevos Vocales suplentes, continuando en esta forma, de suerte que el ingreso en el Consejo será como Vocales suplentes.

Las vacantes producidas durante el período trienal serán provistas, cuando se trate de la Vicepresidencia o de la representación del Consejo Superior de Cámaras, por designación que el Banco de España y el citado Consejo Superior harán, respectivamente, de las personas llamadas a ocuparlas. Cuando la vacante sea la de un representante de los cuatro que cada zona tiene en el Consejo, se procederá por la zona a elegir un Vocal que entre en el Consejo Superior Bancario, ocupando el lugar de Vocal segundo adjunto.

ART. 24. El Consejo Superior Bancario tendrá un Secretario general, que será nombrado por el mismo.

SECCION SEXTA

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE QUIENES DES- EMPEÑAN CARGOS EN EL CONSEJO SUPERIOR BANCARIO

ART. 25. Corresponden al Comisario:

1.º Presidir el Consejo Superior Bancario y sus sesiones, convocándolas y dirigiendo las discusiones y las votaciones.

2.º Representar al Gobierno en el Consejo Superior Bancario.

3.º Representar al Consejo Superior Bancario ante el Gobierno.

4.º Llevar la representación del Consejo Superior Bancario o del Gobierno en los actos jurídicos de todas clases, judiciales o extrajudiciales, que se sigan de la aplicación de la ley de este Reglamento.

5.º Sancionar los acuerdos del Consejo Superior Bancario o interponer su veto suspensivo.

6.º Ejecutar los acuerdos del Consejo Su-

perior Bancario que no hayan tenido su veto.

7.º Recabar la aprobación del Gobierno para los acuerdos del Consejo Superior Bancario que lo necesiten.

8.º Ordenar los pagos.

9.º Firmar las actas y poner su visto bueno a los certificados que por orden suya expida el Secretario.

ART. 26. Corresponde al Vicepresidente suplir al Comisario en el ejercicio de todos sus derechos y deberes, salvo la percepción de la gratificación o sueldo en casos de ausencia, enfermedad o vacante.

El Vicepresidente lo será el Vocal nombrado por el Banco de España. En el caso de ser necesario suplir al Vicepresidente y al Presidente, corresponderá la Vicepresidencia al Vocal nombrado por las Cámaras, y en defecto de éste, al de más edad de los restantes.

ART. 27. Corresponde a los Vocales efectivos participar en la iniciativa, deliberación, discusión y votación de todos los asuntos del Consejo, así como formar parte de las Comi-

siones que éste organice, y realizar las gestiones que se les confie; iguales atribuciones tendrán los Vocales suplentes, a excepción del voto, el cual ejercerán cuando actúen supliendo a un Vocal efectivo.

ART. 28. Corresponde al Secretario general:

1.º Llevar el libro de actas.

2.º Llevar la correspondencia.

3.º Dirigir todo trabajo de oficina, con facultad de suspender el personal a sus órdenes, dando cuenta al Comisario, y dirigir las publicaciones que implante el Consejo.

4.º Cumplir las tareas que el Consejo le encomiende.

5.º Expedir los certificados de acuerdos cuando lo autorice el Comisario.

ART. 29. Todos los miembros del Consejo Superior Bancario tienen el deber estricto de guardar secreto sobre los asuntos tratados, y ninguno será publicado sin autorización del Comisario.

ART. 30. La asistencia a las sesiones es obligatoria.

ART. 31. El Consejo Superior Bancario se reunirá siempre que lo convoque el Comisario, ya espontáneamente, ya por pedirlo por escrito seis Vocales, ya por ordenarlo el Ministro de Hacienda.

Para deliberar es precisa la presencia de seis Vocales, y para tomar acuerdos, el voto de la mitad más uno de los presentes. El Comisario decide en caso de empate.

SECCION SEPTIMA

DEL EJERCICIO DEL VETO

ART. 32. El Comisario sancionará o interpondrá su veto en los acuerdos del Consejo Superior Bancario, sin que pueda abstenerse de votar en ningún caso. El voto favorable del Comisario equivale, en los acuerdos que se hayan tomado reglamentariamente, a su sanción.

La no interposición del veto en el plazo

fijado por el artículo siguiente equivale también a la sanción de los acuerdos, aunque el Comisario hubiera votado en contra.

ART. 33. Para interponer el veto tiene el Comisario un plazo de ocho días, a contar desde el del acuerdo; el veto constará en acta por diligencia que extenderá el Secretario y firmará con el Comisario; será razonado y producirá el efecto de suspender el cumplimiento del acuerdo durante un plazo de ocho días, en los cuales el Ministro, en vista de los antecedentes que le serán enviados sin demora, confirmará la suspensión o autorizará el cumplimiento del acuerdo de que se trate. Transcurrido este plazo, se considerará anulado el veto. Sobre el asunto que haya merecido el veto, si además ha obtenido éste la sanción del Ministro, no podrá volverse a tratar en sesión por el Consejo Superior Bancario en un plazo de tres meses.

SECCION OCTAVA

DE LAS RELACIONES CON EL GOBIERNO

ART. 34. El Consejo Superior Bancario será oído por el Gobierno en los casos a que se refieren las bases segunda y novena del artículo 1.º de la ley. También podrá serlo en cuanto se relacione con el cambio internacional o la regularización del mercado monetario y en los asuntos que afecten a la economía del país en sus relaciones con la Banca privada española.

ART. 35. El informe que el Consejo Superior Bancario dé acerca del aumento de circulación de billetes, será objeto de un estudio especial en sesión expresamente convocada al efecto.

ART. 36. Cuando el Gobierno lo solicite, y siempre que el Consejo Superior Bancario lo repunte conveniente para el interés nacional, se dirigirá al Ministro de Hacienda propo-

niendo las normas que en su opinión proceda adoptar en relación con la política monetaria.

SECCION NOVENA

DE LAS RELACIONES CON EL BANCO DE ESPAÑA

ART. 37. Los Bancos, Banqueros y Sociedades inscritas en la Comisaría tendrán en sus relaciones con el Banco de España los beneficios que se determinan en la base octava del artículo 1.º de la ley de Ordenación bancaria.

ART. 38. El Consejo Superior Bancario estará obligado a expedir a todo Banco o Banquero inscrito certificado de su condición de miembro de la comunidad bancaria con referencia al Registro de la Comisaría.

SECCION DECIMA

DE LA INSPECCIÓN BANCARIA

ART. 39. La inspección de un Banco o Banquero será practicada por el Banco de España, a petición del Consejo Superior Bancario, y

de su resultado se dará cuenta por el Banco de España al Consejo Superior Bancario.

Los gastos que cause la inspección serán soportados por el Consejo Superior Bancario.

SECCION UNDECIMA

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

ART. 40. El Consejo Superior Bancario formará y aprobará anualmente su presupuesto. En el presupuesto se consignará la dotación para atender a los gastos de representación del Vicepresidente, los de los viajes del Comisario en comisión de servicio, las dietas de todos los Vocales por sus asistencias a las sesiones y las compensaciones de los gastos de viaje realizados por el Presidente y los Vocales del Consejo para asistir a sus Juntas.

ART. 41. El Consejo Superior Bancario fijará anualmente el importe del arbitrio anual, a cuyo pago están obligados por la ley los Bancos y Banqueros inscritos en la Comisaría, y podrá acordar derramas extraordinarias

para atender a gastos que, no estando incluidos en el presupuesto ordinario, hayan obtenido la aprobación del Consejo Superior Bancario, siempre dentro del límite establecido en la base séptima del artículo 2.º de la ley de Ordenación bancaria, texto refundido de 24 de enero de 1927.

Madrid, 8 de febrero de 1927. — Aprobado por S. M. — El Ministro de Hacienda, *José Calvo Sotelo*.

MINISTERIO DE HACIENDA

Decreto del 28 de agosto de 1931
(*Gaceta del 29.*)

El desarrollo alcanzado por las Sucursales y filiales de Bancos y Banqueros operantes en España, requiere hace tiempo, y por muchas razones, una publicidad de la situación de dichos establecimientos, aparte y además de la que viene haciendo de los balances de cada Empresa el Consejo Superior Bancario, organismo competente para la formación y publicación de la estadística bancaria.

Mientras que en los balances de los Bancos y Banqueros sin sucursales se revela sin equívoco su situación, no ocurre así respecto a las sucursales que, en la plaza donde actúan, son a veces más importantes que los Bancos y Banqueros locales en ellas establecidos, constituyendo una práctica que debe ser generalizada, la que el Banco de España sigue con la publicación de Memorias de sus Sucursales.

La situación de estas Sucursales interesa, tanto como al Banco que las desarrolla y ve en ellas un elemento esencial de su organización, a la clientela bancaria que contribuye a la obra de expansión con los negocios, cuentas corrientes y operaciones y contratos de todas clases con que se llama y anima de un modo tan esencial la organización del crédito, que no basta para abrir una Sucursal la voluntad de un Banco, porque es además necesario la existencia en la economía local de condiciones, recursos y negocios, así como, por parte del Banco que se expansiona, aumento de dotación financiera, aspectos éstos hasta ahora abandonados y en los cuales existe sin duda alguna una obligación de vigilancia para el Estado, que habrá de cumplirse en lo sucesivo.

La interpretación que hasta ahora se ha dado a la obligación de remitir balances al Consejo Superior Bancario, publicar, según espera y desea el Gobierno, datos globales por provincias, zonas y demarcaciones administrativas.

Por las razones expuestas, el Gobierno de la República, a propuesta del Ministro de Hacienda, decreta:

ARTÍCULO 1.º Ningún Banco o Banquero operante en España podrá aumentar el número de sus sucursales o filiales sin previa autorización del Delegado del Gobierno en el Consejo Superior Bancario, ante el cual, y a los efectos de la Consulta del Consejo Superior Bancario, se presentarán las justificaciones económicas y financieras para la apertura de un nuevo establecimiento.

ART. 2.º La estadística de balances bancarios, a cuya publicación viene obligado el Consejo Superior Bancario, se aplicará en la forma y periodicidad que acuerde dicho organismo oficial con los balances de situación de las sucursales y filiales bancarias establecidas en España, y los Bancos y Banqueros vienen obligados a remitir, una vez al menos cada año, los balances y las cuentas de Pérdidas y Ganancias de cada una de sus sucursales o filiales.

ART. 3.º El Delegado del Gobierno, Presidente del Consejo Superior Bancario, dictará, con consulta de éste, las normas e instrucciones necesarias para el cumplimiento de este Decreto.

Dado en Madrid a veintiocho de agosto de mil novecientos treinta y uno.—El Presidente del Gobierno de la República, NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.—El Ministro de Hacienda, *Indalecio Prieto y Tuero*.

BANCO DE ESPAÑA
ESTATUTOS

DECRETO DE 24 DE MAYO DE 1933
(*Gaceta del 27.*)

Elevada por el Banco de España, en virtud de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de 26 de noviembre de 1931, propuesta de reforma de sus Estatutos, aprobada por la Comisión Delegada de Accionistas y el Consejo General, de acuerdo con el Consejo de Ministros y oído el Consejo de Estado,

Vengo en disponer que dicho Banco se rija en lo sucesivo por los siguientes

ESTATUTOS

CAPITULO PRIMERO

SOBRE EL CAPITAL, LEGISLACIÓN Y ACCIONES DEL BANCO DE ESPAÑA

Capital.

ARTÍCULO 1.º El Banco de España, existente con diferentes títulos desde 1829, e instituido como único nacional de emisión por el Decreto-ley de 19 de marzo de 1874, por la Ley de 14 de julio de 1891 y por la de 29 de diciembre de 1921, reformada esta última por la de 26 de noviembre de 1931, subsistirá con un capital de 177 millones de pesetas efectivas, representado por 354.000 acciones nominativas de 500 pesetas cada una y completamente liberadas.

Si el Consejo del Banco entendiase que pro-

cede en cualquier ocasión el aumento de capital, cuantas veces lo estime conveniente someterá sus propuestas a las Juntas generales extraordinarias, especialmente convocadas a este efecto, con autorización del Gobierno y obtenido el voto favorable de las dos terceras partes de los Accionistas concurrentes, podrá el Gobierno autorizar dichos aumentos hasta la cifra máxima de 250 millones de pesetas, previa determinación de la forma en que habrán de cumplirse los preceptos A y B ordenados en la base primera del artículo 1.º de la Ley de 29 de diciembre de 1921 citada.

Legislación.

ART. 2.º Rigiéndose el Banco por su legislación orgánica, con arreglo al artículo 159 del Código de Comercio, continuará en la observancia de sus Estatutos y Reglamentos por todo el tiempo de su duración, que será indefinida, sin que le sea aplicable el título 1.º, libro 2.º, de dicho Código. Mientras corres-

ponda al Establecimiento la facultad exclusiva de emitir billetes al portador, no podrán sus Juntas generales adoptar acuerdos que impliquen la reducción del capital, ni la disolución de la Sociedad.

Las operaciones del Banco se regirán por sus Leyes orgánicas, Estatutos y Reglamentos; en su defecto, por el Código de Comercio; en lo que éste no prevea, por los usos del Comercio generalmente observados, y a falta de ellos, por las reglas del derecho común.

ARTÍCULO 159 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Las Compañías anónimas existentes con anterioridad a la publicación de este Código, y que vienen rigiéndose por sus reglamentos y estatutos, podrán elegir entre continuar observándolos o someterse a las prescripciones del Código.

Acciones.

ART. 3.º Las acciones del Banco consisten en participaciones indivisibles de su capital, reconocidas por el mismo Banco mediante inscripciones en sus libros a favor de los Accionistas.

Los extractos de inscripción son el título de dichas participaciones, y no se expedirán sino en representación de una o varias acciones completas, pudiendo ser expedidos a favor de uno o varios titulares.

Las acciones del Banco se podrán domiciliar en las Sucursales y trasladarse de unas a otras, y de éstas a Madrid, para su transferencia y cobro de los dividendos; pero el título de su propiedad solamente se expedirá por la Administración central del Banco.

El Banco anotará para su cumplimiento el embargo o retención de las acciones o de sus dividendos que se le comunique por autoridad competente.

No mediando traba respecto de los dividendos, podrá pagarlos al presentador del extracto o abonarlos en la cuenta corriente que el mismo designe, o en otra forma que pueda acordarse.

Contratación de las acciones.

ART. 4.º El dominio pleno o menos pleno de las acciones, disponible en derecho, podrá enajenarse por transferencia reglamentaria, escritura pública u otro título traslativo bastante, o resolución firme de autoridad competente.

El Banco no contrae responsabilidad alguna por efecto de cualquier transmisión no formalizada en sus registros.

La transferencia reglamentaria consiste en una declaración que ante la representación del Banco subscribe el accionista por sí mismo o por quien le represente debidamente, y con intervención de Agente de Cambio y Bolsa, o de Corredor colegiado de Comercio, que firma

a los efectos de los artículos 93 y párrafo 1.º del 95 del Código de Comercio.

ARTÍCULO 93 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Los Agentes colegiados tendrán el carácter de Notarios en cuanto se refiera a la contratación de efectos públicos, valores industriales y mercantiles, mercaderías y demás actos de comercio, comprendidos en su oficio, en la plaza respectiva.

Llevarán un libro-registro con arreglo a lo que determina el art. 36, asentando en él, por su orden, separada y diariamente, todas las operaciones en que hubiesen intervenido, pudiendo, además, llevar otros libros con las mismas solemnidades.

Los libros y pólizas de los Agentes colegiados harán fe en juicio.

“R. O. de 23 de julio de 1923 (Gaceta del 31) disponiendo que el libro-registro que obligatoriamente deben llevar los Agentes de Cambio y

Bolsa y Corredores oficiales de Comercio debe contener las casillas que se indican:

Fechas: Día, mes, año.—Número de los asientos del libro-registro.—Corretajes sobre operaciones al contado: Sobre Arancel, sobre convenio colectivo legalmente acordado.—Corretajes sobre operaciones a plazo y dobles: Sobre Arancel, sobre convenio colectivo legalmente acordado.—Corretajes por orden de la Sindicatura y para el Colegio: Sobre Arancel, sobre convenio colectivo legalmente acordado.—Resumen: Corretajes para el Agente, corretajes para el Colegio."

ARTÍCULO 58 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Si apareciere divergencia entre los ejemplares de un contrato que presenten los contratantes, y en su celebración hubiere intervenido Agente o Corredor, se estará a lo que resulte de los libros, siempre que se encuentren arreglados a derecho.

ARTÍCULO 596 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO
CIVIL

Bajo la denominación de documentos públicos y solemnes se comprenden:

.....
2.º *Las certificaciones expedidas por los Agentes de Bolsa y Corredores de Comercio, con referencia al libro-registro de sus respectivas operaciones, en los términos y con las solemnidades que prescriben el art. 64 del Código de Comercio (art. 93 del vigente) y leyes especiales.*
.....

ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Presentarán los comerciantes los libros a que se refiere el art. 33, encuadernados, forrados y foliados, al Juez municipal del distrito en donde tuvieren su establecimiento mercantil, para que ponga en el primer folio de cada uno nota firmada de los que tuviere el libro.

Se estampará además en todas las hojas de

cada libro el sello del Juzgado municipal que lo autorice.

ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Será obligación de los Agentes colegiados:

1.º *Asegurarse de la identidad y capacidad legal para contratar de las personas en cuyos negocios intervengan, en su caso, de la legitimidad de las firmas de los contratantes.*

Cuando éstos no tuvieren la libre administración de sus bienes, no podrán los Agentes prestar su concurso sin que preceda la debida autorización con arreglo a las leyes.

2.º *Proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad, absteniéndose de hacer supuestos que induzcan a error a los contratantes.*

3.º *Guardar secreto en todo lo que concierna a las negociaciones que hicieren y no revelar los nombres de las personas que se las encarguen, a menos que exija lo contrario la ley o la naturaleza de las operaciones en que los interesados consientan en que sus nombres sean conocidos.*

4.º *Expedir, a costa de los interesados que la pidieren, certificación de los asientos respectivos de sus contratos.*

ARTÍCULO 26 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Los documentos inscriptos sólo producirán efecto legal en perjuicio de tercero desde la fecha de su inscripción, sin que puedan invalidarlos otros anteriores o posteriores, no registrados.

ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Los Agentes de Bolsa, además de las obligaciones comunes a todos los Agentes mediadores, enumeradas en los arts. 95 (1), 96, 97 y 98, serán responsables civilmente por los títulos o valores industriales o mercantiles que vendieren después de hecha pública por la Junta Sindical la denuncia de dichos valores como de procedencia legítima.

(1) Véase página 168.

ARTÍCULO 96 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

No podrán los Agentes colegiados:

- 1.º *Comerciar por cuenta propia.*
- 2.º *Constituirse en aseguradores de riesgos mercantiles.*
- 3.º *Negociar valores o mercancías por cuenta de individuos o Sociedades que hayan suspendido sus pagos o que hayan sido declarados en quiebra o en concurso, a no haber obtenido rehabilitación.*
- 4.º *Adquirir para sí los efectos de cuya negociación estuvieren encargados, salvo en el caso de que el Agente tenga que responder de faltas del comprador al vendedor.*
- 5.º *Dar certificaciones que no se refieran directamente a hechos que consten en los asientos de sus libros.*
- 6.º *Desempeñar los cargos de cajeros, tenedores de libros o dependientes de cualquier comerciante o establecimiento mercantil.*

ARTÍCULO 97 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Los que contravinieren a las disposiciones del artículo anterior, serán privados de oficio por el Gobierno, previa audiencia de la Junta Sindical y del interesado, el cual podrá reclamar contra esta resolución por la vía contencioso-administrativa.

Serán, además, responsables civilmente del daño que se siguiere por faltar a las obligaciones de su cargo.

ARTÍCULO 98 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

La fianza de los Agentes de Bolsa, de los Corredores de Comercio y de los Corredores intérpretes de buques, estará especialmente afectada a las resultas de las operaciones de su oficio, teniendo los perjudicados una acción real preferente contra la misma, sin perjuicio de las demás que procedan en derecho.

Esta fianza no podrá alzarse, aunque el Agente cese en el desempeño de su cargo, hasta

transcurrido el plazo que se señala en el artículo 946, sin que dentro de él se haya formalizado reclamación.

Sólo estará sujeta la fianza a responsabilidades ajenas al cargo cuando las de éste se hallen cubiertas íntegramente.

Si la fianza se desmembrare por las responsabilidades a que está afecta o se disminuyere por cualquier causa su valor efectivo, deberá reponerse por el Agente en el término de veinte días.

ARTÍCULO 946 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

La acción real contra la fianza de los Agentes mediadores sólo durará seis meses, contados desde la fecha del recibo de los efectos públicos, valores de comercio o fondos que se les hubieren entregado para las negociaciones, salvo los casos de interrupción o suspensión expresados en el artículo 944.

ARTÍCULO 944 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

La prescripción se interrumpirá por la demanda u otro cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor; por el reconocimiento de las obligaciones, o por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor.

Se considera la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial si el actor desistiere de ella o caducara la instancia, o fuese desestimada su demanda.

Empezará a contarse nuevamente el término de prescripción en caso de reconocimiento de las obligaciones desde el día en que se haga; en el de su reconocimiento, desde la fecha del nuevo título, y si en él se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación, desde que éste hubiere vencido.

CAPITULO II

DE LAS OPERACIONES

Emisión.

ART. 5.º Corresponde al Banco de España la facultad exclusiva para emitir billetes al portador hasta el 31 de diciembre de 1946, ejerciéndola el Banco como único de emisión en el territorio nacional y en las posesiones españolas, dentro de los límites, con las garantías metálicas y en la proporción con los demás conceptos de su activo y de su pasivo que establece la Ley.

Atenderá el Consejo a las necesidades de la circulación, ordenando, con la debida publicidad, la emisión de cada serie en la cantidad que convenga y con las mayores garantías posibles para impedir su falsificación, instando la persecución y castigo de este delito y disponiendo en su caso la retirada y substitución

de las series legítimas circulantes si las circunstancias lo aconsejan.

Los billetes emitidos por el Banco de España se pagarán al portador en todas sus Cajas habilitadas a este fin y en los días y horas públicamente señalados.

Depósitos.

ART. 6.º Las Cajas del Banco autorizadas para ello podrán recibir en depósito:

Monedas de curso legal en la Nación o billetes del mismo Banco.

Valores mobiliarios nacionales y los extranjeros cuya admisión se halle legalmente autorizada.

Alhajas, metales preciosos u objetos de especial estimación en cajas precintadas.

Los depósitos voluntarios podrán ser constituidos en forma transmisible o intransmisible, según que sus resguardos hayan de ser o no endosables. Los depósitos necesarios, judiciales y de fianzas se consignarán mediante res-

guardos diferentes entre sí y adecuados a su respectiva naturaleza.

Responsabilidad.

ART. 7.º La responsabilidad del Banco como depositario consistirá:

En devolver la misma cantidad en numerario nacional en equivalencia de los depósitos de metálico.

En devolver los mismos valores mobiliarios que hubiese recibido o los que les substituyan por amortización, conversión o canje que haya realizado la entidad emisora.

En devolver, con los precintos intactos, las cajas de los depósitos de alhajas, sin consideración alguna a su contenido, y sin que el Banco responda de los casos fortuitos, ni contraiga responsabilidad alguna en razón del valor que le asignara el depositante o al demérito que pudiera haber sufrido.

Devolución de depósitos.

ART. 8.º La devolución de los depósitos se hará, previa la presentación de los resguardos que el Banco hubiese expedido y el recibo en ellos, suscrito por la persona con derecho a retirar lo depositado.

El Banco podrá exigir la justificación documental de este derecho cuando proceda; y siempre que lo tenga a bien, garantías o conocimientos satisfactorios, a su juicio, de las firmas.

Cuentas corrientes.

ART. 9.º El Banco podrá abrir y llevar cuentas corrientes de metálico o de valores mobiliarios a las personas naturales o jurídicas y a las Corporaciones o entidades debidamente representadas, cuya solicitud no ofrezca inconveniente en opinión reservada del Establecimiento.

Las cuentas corrientes en moneda de oro no recibirán ingresos de otra clase.

Las cuentas ordinarias de efectivo podrán recibir metálico de curso legal; talones y demás documentos a cargo de otras cuentas corrientes; efectos de comercio sobre la misma plaza a cargo de terceros, ya aceptados si son a días vista; dividendos de acciones del Banco o intereses de depósitos de valores constituidos en el mismo y pertenecientes aquéllas y éstos, bien al titular de la cuenta corriente, bien a terceros; el producto de operaciones de descuento o negociación y las entregas que en otras cajas del Banco se realicen con abono a dicha cuenta.

Para cada clase de cuenta corriente, el Banco proveerá de los cuadernos de talones que el titular necesite, y mediante los talones, debidamente autorizados, pagará las cantidades y devolverá los títulos a cargo de los saldos respectivos. Contra las cuentas corrientes de metálico serán también admisibles los cheques al portador, nominativos y cruzados, las letras

de cambio y las órdenes de entrega de todo género, cuya autenticidad no ofrezca reparo, habiendo saldo suficiente disponible a la fecha de la presentación del documento de data.

Descuentos.

ART. 10. El Banco podrá descontar efectos cuyo vencimiento no exceda de noventa días, siempre que se hallen expedidos con las formalidades prescriptas por las leyes y contengan dos firmas, por lo menos, de personas o entidades de reconocida solvencia a juicio reservado del Banco, según los datos que adquiera.

Si los efectos, aparte de ostentar dos o más firmas solventes, son presentados al redescuento por Bancos, Banqueros o Sociedades de crédito, adscriptos al régimen establecido en el artículo 2.º de la Ley de 29 de diciembre de 1921, reformada por la de 26 de noviembre de 1931, el Banco de España concederá a los cedentes una bonificación de 1 por 100 anual sobre el capital, en el interés que tenga esta-

blecido para los descuentos. Cuando el interés sea inferior a 5 por 100, se reducirá dicha bonificación en la proporción necesaria para que equivalga a una quinta parte del tipo de interés señalado por el Banco.

De igual bonificación sobre los descuentos disfrutarán las Cajas de Ahorro del Patronato del Gobierno, las Cajas rurales y Sindicatos agrícolas constituidos legalmente y los demás organismos para el desenvolvimiento del crédito agrícola creado por leyes especiales y que sean objeto de los beneficios concedidos a los Sindicatos.

Asimismo se aplicará el régimen de bonificación en las operaciones de descuento que verifiquen los agricultores con objeto de arbitrar fondos destinados precisamente a intensificar la producción, siempre que los efectos sean descontados con la firma del propietario de la tierra y de un Sindicato agrícola de la comarca, o de un banquero local, o de otra firma, todas ellas a satisfacción del Banco.

Las operaciones a que se refieren los dos

párrafos anteriores se realizarán por medio de efectos descontados y también en forma de cuentas de crédito con garantía de letras, siempre que su vencimiento no exceda de un año y se hallen giradas a cargo de personas adscriptas a un Sindicato o de propietarios que traten de intensificar la producción.

Los socios colectivos de una Compañía mercantil sólo pueden computarse como una sola firma para los efectos del descuento.

También podrán descontarse cupones y títulos amortizados de Deudas del Estado o del Tesoro y de valores industriales o mercantiles, sin que en esta operación se conceda la bonificación a que se hace referencia en este artículo.

La Administración del Banco es árbitra de admitir o rehusar el descuento, sin motivar su determinación.

Préstamos.

ART. 11. El Banco hará préstamos por plazos que no excedan de noventa días, con garantía de pastas o monedas de oro o plata o en títulos de la Deuda del Estado o del Tesoro o en otra clase de efectos o valores que precisamente haya designado el Consejo, atendiendo a su estimación en el mercado. Las pastas o monedas de oro o plata podrán admitirse hasta por el 90 por 100 de su valor intrínseco; los títulos o efectos representativos de las Deudas del Estado, hasta el 80 por 100 de su valor efectivo, y en casos excepcionales, al que se acuerde entre el Ministerio de Hacienda y el Banco, sin exceder del 90 por 100 de dicho valor efectivo; los del Tesoro, al mismo tipo de 80 ó al que se convenga entre dicho Ministerio y el Banco, y los demás valores o efectos, en las condiciones que para cada caso determine el Banco.

Se concederá una bonificación, limitada a un

tipo invariable de $\frac{1}{2}$ por 100, a los Bancos, Banqueros y Sociedades indicadas en el artículo anterior, que presten su aval en los préstamos con garantía de valores, con excepción de los que se refieran a títulos del Estado o del Tesoro, a valores industriales de empresas que exploten un monopolio del Estado y a títulos o valores cuyo servicio de interés o amortización se halle garantizado directamente por el Estado.

Las operaciones sobre estos títulos o valores podrán dar lugar a un régimen de bonificación, concertado entre el Banco de España y el Consejo Superior de la Banca privada, con la aprobación del Ministro de Hacienda.

Préstamos especiales.

ART. 12. También podrá prestar el Banco sobre conocimientos de embarque y sobre mercancías aseguradas, siempre que los resguardos de depósito de éstas se hallen expedidos por Compañías de depósito legalmente constituidas

o por personas o entidades que ofrezcan garantías suficientes a juicio del Banco. Sobre los conocimientos de embarque, podrá prestarse hasta el 50 por 100, y sobre los resguardos de depósito, hasta el 70 por 100 del precio corriente en plaza, de las mercancías pignoras, siendo árbitro el Banco de reducir estos tipos en todo momento. Podrán, en cambio, elevarse en un 10 por 100 cuando los préstamos se hagan a nombre de Sociedades de crédito, Bancos y Banqueros adscritos al régimen establecido en el artículo 2.º de la ley.

Ventas de garantías.

ART. 13. El Banco podrá disponer las ventas de las garantías al tercer día o cualquier otro posterior de haber requerido por simple aviso escrito a los prestatarios para que mejoren dichas garantías, si no lo hubieren verificado, y después del vencimiento de la obligación si no hubiera sido satisfecha.

A estas ventas se procederá sin necesidad

de procedimiento judicial, con intervención de Agente colegiado de Cambio y Bolsa o Corredor de Comercio, según los casos, o por otro medio oficial o extraoficial que se hallare establecido por el uso en las respectivas localidades.

Para que no haya obstáculo en las enajenaciones y pueda siempre realizarlas el Banco sin intervención del deudor, los efectos que constituyan las garantías se considerarán transferidos al mismo Establecimiento, sin otra formalidad, por el mero hecho de habérsele dado en aquel concepto, y desde el día en que se hubieren entregado. Las inscripciones y los valores nominativos habrán de transmitirse en debida forma, dándose, no obstante, por la Administración a los interesados un resguardo en que se exprese este único y exclusivo objeto de la transferencia.

Si el producto de la garantía no alcanzase a cubrir íntegramente el capital del préstamo y sus intereses y gastos, el Banco procederá, por la diferencia, contra el deudor, a quien,

por el contrario, será entregado el exceso, si lo hubiere, excepto cuando haya contraído el prestatario otra u otras deudas con el Banco antes de haberse pagado la primera, en cuyo caso se retendrá dicho exceso, con aplicación a la seguridad y pago de todas las demás deudas, aunque para ello no se hubiese estipulado la sujeción de la garantía.

Si fueren diversas las garantías de una misma operación de préstamo o crédito, y se realizare cualquiera de ellas con independencia de las demás, el abono del importe de su liquidación sólo producirá el efecto de reducir en la misma suma el saldo deudor. Caso de que éste quedare cubierto con exceso, tendrá el sobrante la aplicación señalada en el párrafo anterior.

Ventas de garantías especiales.

ART. 14. En los préstamos sobre conocimientos de embarque, la reposición de la garantía se hará en los términos expresados en

el artículo anterior. Si no se repone, y asimismo, si al vencimiento de la obligación no fuese pagada, haya o no llegado el buque que conduzca las mercancías, el Banco podrá, o demandar desde luego al deudor, o esperar el arribo del buque para la venta de dichas mercancías, supuesto que, aun intentando lo primero, no por ello pierde el Banco su derecho de liquidar la garantía, bien enajenando por precio a tercero el conocimiento, bien realizando la venta de las mercancías cuando lleguen a puerto.

Créditos con garantía.

ART. 15. Las operaciones de préstamo en los casos y con los requisitos que establezca el Reglamento, podrán tener la forma de cuentas corrientes de crédito con garantías pignoraticias, siendo aplicable a éstas cuanto se declara y prescribe antes sobre garantías de los préstamos.

Créditos personales.

ART. 16. Mediante pólizas adecuadas para que sea posible respecto de ellas el cotejo con los registros del Agente mediador, a los efectos del párrafo 6.º, artículo 1.429, de la ley de Enjuiciamiento civil, puede el Banco conceder cuentas corrientes de crédito personal con garantía, a lo menos, de dos firmas que a su juicio reservado gocen de completa solvencia.

ARTÍCULO 1.429 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

La acción ejecutiva deberá fundarse en un título que tenga aparejada ejecución.

Sólo tendrán aparejada ejecución los títulos siguientes:

.....
6.º *Las pólizas originales de contratos celebrados con intervención de Agente de Bolsa o Corredor público, que estén firmadas por los*

contratantes y por el mismo Agente o Corredor que intervino en el contrato, con tal de que se comprueben, en virtud de mandamiento judicial y con citación contraria, con su registro, y éste se halle arreglado a las prescripciones de la ley.

Estas operaciones podrán realizarse al plazo máximo inicial de noventa días, y renovarse potestativa y tácitamente por plazos iguales, mientras dure la validez legal de la póliza por razón del timbre.

Los firmantes en cualquier concepto se reconocerán obligados solidariamente y renunciarán a los beneficios de excusión y división, de suerte que el Banco podrá ejercitar su acción contra cualquiera de ellos indistinta, simultánea y sucesivamente.

Cajas de alquiler.

ART. 17. En las dependencias donde el Banco instale Cajas de seguridad, podrá conceder su uso a las personas o entidades que se

obliguen a cumplir las condiciones reglamentariamente fijadas. La obligación del Banco sólo consiste en conservar íntegra la clausura de la caja alquilada y permitir su uso regular, sin que el Banco responda de los casos fortuitos ni contraiga responsabilidad alguna en razón del valor que pueda tener o demérito que sufra el contenido de la caja.

Otras operaciones.

ART. 18. Además de las operaciones reguladas en los precedentes artículos, puede el Banco realizar, ajustándose siempre a las leyes y Reglamentos, todas las operaciones habituales de la Banca, compra y venta de metales preciosos, giro en todas sus formas, traslado de fondos y valores de unas a otras cajas; servicio de cobros y pagos por cuenta ajena, y en general, el de comisión mercantil en asuntos bancarios. No podrá especular mediante la compraventa por cuenta propia de valores mobiliarios, ni prestar con garantía de sus

propias acciones, ni aceptar hipotecas sino como superposición de garantía respecto de operaciones hechas en condiciones reglamentarias, y cuya futura solvencia ofrezca, a juicio del Banco, dificultad, o de las ampliaciones de crédito que el Banco considere necesario otorgar para salvar situaciones críticas de sus deudores y asegurar el pago total de las sumas prestadas.

Si en pago de créditos vencidos el Banco recibe acciones u obligaciones de otras Sociedades o bienes inmuebles que no haya de utilizar para sus dependencias, procederá lo antes posible a su enajenación.

Tanto respecto de las operaciones más importantes que describen los precedentes artículos, como a las demás establecidas o que se establezcan, el Reglamento general y los particulares de determinados servicios y los acuerdos del Consejo fijarán las normas prácticas que convengan.

Los premios de los giros, entregas de fondos para abonar en cuentas corrientes de otras



plazas y la remuneración de los demás servicios, se fijarán por el Consejo del Banco para Madrid y para cada una de sus dependencias, pudiendo ser diversos en la Oficina central y en cada Sucursal, según los plazos y la índole y circunstancias de las operaciones.

El tipo de descuento de los efectos comerciales y el interés que rija para los préstamos y créditos con garantía de valores de todas clases y demás operaciones que el Banco realice, se fijará por éste con aprobación del Ministro de Hacienda, siendo potestativo de ambos promover su alteración.

En los casos excepcionales previstos en el último párrafo de la base duodécima del artículo 1.º de la ley de Ordenación bancaria reformada, el Banco elevará el tipo de descuento de los efectos comerciales y del interés en las demás operaciones cuando así lo ordene el señor Ministro de Hacienda por acuerdo del Consejo de Ministros.

Servicios al Estado.

ART. 19. El Banco de España realizará gratuitamente el servicio de Tesorería del Estado, así en España como en el Extranjero. Las operaciones de cualquier clase en el Extranjero devengarán las comisiones de banca que el Establecimiento haya de abonar por la situación y aplicación de fondos en todas las plazas; y la cantidad fija convenida para el sostenimiento de las Agencias en varias naciones subsistirá mientras el Estado estime conveniente su conservación para los intereses públicos.

Todos los demás servicios permanentes u ocasionales que el Banco preste al Estado serán regulados por convenios especiales, y devengarán la retribución establecida en ellos.

También serán objeto de convenios especiales las operaciones de crédito que el Banco realice con el Gobierno, pudiendo sus condiciones ser diferentes de las establecidas para las demás operaciones.

En virtud de la legislación vigente, el Banco, como ampliación de sus operaciones, tiene parte en el capital del Banco de Estado de Marruecos, e igualmente participa en el capital del Banco Exterior de España.

Secreto de las operaciones.

ART. 20. Se prohíbe al Banco facilitar noticia alguna de los fondos que tenga en cuenta corriente, depósito o en cualquier otro concepto, pertenecientes a persona determinada, a no ser al propio interesado, a su representación legal o en virtud de providencia judicial.

La intervención de los accionistas en las operaciones tendrá lugar por medio de Juntas, Consejos de administración o Comisiones de descuento, según determinen los Reglamentos y acuerdos del Consejo del Banco, atendiendo a la importancia y carácter de los negocios en que se haya de ocupar cada una de aquellas dependencias.

Balances.

ART. 21. En fin de junio y de diciembre de cada año se formará Balance general de activo y pasivo del Banco, y en su vista, el Consejo acordará las aplicaciones que a su juicio procedan de los beneficios obtenidos, las bonificaciones a las cuentas que convenga sanear, los abonos a los diversos fondos de reserva y de previsión, y en especial al preceptuado en las bases tercera y séptima de la ley, así como los dividendos que correspondan a los accionistas.

Al término del ejercicio, el Banco facilitará a las Oficinas públicas los datos conducentes a la liquidación complementaria de la contribución de utilidades, y sin demora se procederá al consiguiente cómputo e ingreso en Tesorería de la participación en la distribución de los beneficios del Establecimiento que al Estado corresponda con arreglo al apartado E), base tercera, artículo 1.º, en la vigente ley de Ordenación bancaria.

Fondos de reserva y previsión.

ART. 22. Corresponde al Consejo del Banco el ejercicio de las facultades que para la constitución y aplicación de los fondos de reserva y previsión se derivan de la base quinta, artículo 1.º, de la expresada ley. El fondo de reserva permanente constituido hasta el 31 de diciembre de 1921 no podrá ser reducido sino por acuerdo de la mayoría absoluta del Consejo, para completar a cargo de dicho fondo un dividendo del 15 por 100 anual en el caso de que los beneficios del Establecimiento y la aplicación de los fondos de previsión disponibles no permitieran en cualquier ejercicio distribuir integramente dicho dividendo.

Salvo lo dispuesto en las bases tercera y séptima de la ley en cuanto a la reserva especial, todos los acuerdos del Consejo relativos a la creación y a los aumentos de los fondos de reserva y previsión tendrán carácter provisional, ínterin son o no aprobados por la Junta general ordinaria inmediata.

CAPITULO III

DEL GOBIERNO, CONSEJO Y ADMINISTRACIÓN

Consejo.

ART. 23. El gobierno del Banco de España está a cargo del Gobernador, de dos Subgobernadores y de 21 Consejeros, que forman el Consejo del Establecimiento, correspondiendo a los tres primeros la administración superior del Banco.

Directores de servicios.

ART. 24. De nombramiento del Consejo aprobado por Orden ministerial, habrá los Jefes titulados:

Secretario general,
Director Jefe de Sucursales,
Interventor Jefe de la Contabilidad,
Cajero de metálico,
Cajero de valores,
Jefe de operaciones

y los demás Directores de servicios que establezcan los Reglamentos, así como los de las Sucursales y dependencias del Banco dentro y fuera del territorio nacional.

Gobernador.

ART. 25. El Gobernador, nombrado por el Gobierno, reúne el doble carácter de representante del Estado y de Jefe superior de la Administración del Banco.

Sus atribuciones son:

1.^a Cuidar de que las operaciones todas sean conformes a las leyes, Estatutos y Reglamentos, y velar constantemente por que las existencias metálicas y valores de Cartera guarden la proporción legal establecida con los billetes, cuentas corrientes y depósitos, y las primeras, con los billetes emitidos.

2.^a Suspender la ejecución de los acuerdos que pudiera adoptar el Consejo o Comisión de él cuando no estuviesen ajustados a las leyes, Estatutos o Reglamentos, advirtiéndolo de ello

al mismo Consejo, y si éste insistiere en su resolución, dando cuenta inmediatamente al Ministro de Hacienda.

3.^a Presidir la Junta general de Accionistas, el Consejo y, cuando lo tenga por conveniente, las Comisiones ordinarias o extraordinarias.

4.^a Llevar la firma del Banco y su correspondencia; autorizar los contratos que a nombre de éste se celebren, y ejercer en su representación todas las acciones judiciales y extrajudiciales que le competan.

5.^a Dirigir el servicio de la Administración conforme a los Estatutos, Reglamentos y acuerdos del Consejo, y convocar a éste para la celebración de sus sesiones.

6.^a Nombrar, con sujeción a los mismos Estatutos y Reglamentos y a los acuerdos del Consejo, todos los empleados, excepto los Jefes y Directores mencionados en el artículo 24, y separarlos en la propia forma cuando incurran en faltas que hagan necesaria esta determina-

ción, dando en uno y otro caso cuenta al Consejo en su sesión más próxima.

7.ª Proponer al Consejo, de acuerdo con la Comisión respectiva y fundando la propuesta, personas idóneas para los cargos de Jefes de oficinas y Directores antedichos, y suspenderlos también en el ejercicio de sus destinos, dando inmediatamente cuenta de esta providencia y de sus motivos al mismo Consejo.

8.ª Ejercer las facultades que le atribuye el artículo 8.º de la ley de 26 de noviembre de 1931.

El Gobernador podrá delegar en los Subgobernadores la parte que estime conveniente de las atribuciones 4.ª y 5.ª, sin perjuicio de la substitución a que se refiere el artículo 30, y los Subgobernadores a su vez, y en armonía con la delegación de atribuciones que les sea otorgada por el Gobernador, podrán delegar en los Jefes y Subjefes de oficina la firma corriente de correspondencia, la relativa a ejecución de acuerdos ordinarios y demás documen-

tos de mero trámite, dando de ello previamente cuenta al Gobernador.

De la delegación de atribuciones del Gobernador en favor de los Subgobernadores, así como de las alteraciones que por cualquier circunstancia o motivo se estimase conveniente establecer en las facultades delegadas, habrá de darse previamente conocimiento al Consejo.

ART. 26. El Gobernador y los Subgobernadores tendrán voz y voto en el Consejo y Comisiones. En los casos de empate en el Consejo, podrá diferirse el asunto, si no es urgente, para la sesión inmediata, y si en ella persiste el empate, decidirá el voto del Presidente.

ART. 27. No podrá el Gobernador disponer giro, descuento, préstamo ni pago de ninguna especie, ni contraer compromisos que obliguen al Banco, sin que preceda autorización del Consejo o de la Comisión a que corresponda su acuerdo.

ART. 28. Tampoco podrá el Gobernador ni los Subgobernadores presentar a descuento en

el Banco efecto alguno con sus firmas, tomar de él dinero u otros valores a préstamo, ni dar para estas operaciones su garantía personal.

ART. 29. El Gobernador dispondrá que el Consejo sea enterado oportunamente de todas las incidencias que ocurran y merezcan serle conocidas.

Subgobernadores.

ART. 30. Los Subgobernadores serán nombrados por Decreto, a propuesta del Consejo, con los títulos de primero y segundo, y por su orden substituirán al Gobernador cuando éste no concurra a los actos en que deba ejercer sus atribuciones. El Gobernador señalará las que haya de desempeñar ordinariamente cada uno de los Subgobernadores, distribuyendo entre ellos los servicios que no tenga por conveniente reservarse.

Los Subgobernadores podrán ser separados de sus destinos a propuesta del Consejo del Banco, o en mérito del expediente que se for-

mará en el Ministerio de Hacienda; y, oídos el interesado, el Consejo del Banco y el de Estado, resolverá el Consejo de Ministros.

ART. 31. Los Subgobernadores, para entrar en posesión de sus cargos, deberán haber depositado en la Caja del Banco 50 acciones del mismo, inscritas a su nombre en plena propiedad, que no les serán devueltas hasta que, habiendo cesado en el desempeño de sus destinos, hayan sido aprobados en Junta general de Accionistas los actos en que hubieren intervenido.

ART. 32. Los Subgobernadores ejercerán las atribuciones que el Gobernador les haya delegado, y con respecto a los servicios que a cada uno se le encomienden, serán los directamente encargados:

1.º De las ponencias en las Comisiones.

2.º Del servicio de las oficinas, vigilancia de las Cajas y Cartera, buen orden y método de la contabilidad, e inspección de todos los libros y registros que se lleven para las operaciones propias del Banco.

3.º De la ejecución y cumplimiento de los acuerdos y disposiciones del Consejo o de las Comisiones.

ART. 33. El Gobernador y los Subgobernadores asistirán al Banco diariamente, y no podrán ausentarse de Madrid: el primero, sin licencia del Ministro de Hacienda, y los segundos, sin la del Consejo.

La remuneración del cargo de Gobernador no será menor de 45.000 pesetas anuales.

Consejeros.

ART. 34. Pueden pertenecer al Consejo del Banco como Consejeros los Accionistas españoles varones con plena capacidad civil, que no estén en descubierto con el Establecimiento por ninguna obligación vencida; que no hayan instado nunca el beneficio de quita y espera ni la suspensión de pagos; que no hayan sido declarados en quiebra ni en concurso de acreedores, ni sufrido nunca imposición judicial de las penas denominadas graves por el Código penal.

Incompatibilidades.

ART. 35. No podrán pertenecer a un mismo tiempo al Consejo los que sean parientes entre sí dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad.

Elección de Consejeros.

ART. 36. Los Consejeros del Banco de España serán veintiuno, a saber:

Quince elegidos entre los Accionistas que a lo menos desde tres meses antes tengan inscritas, sin interrupción, a su nombre en plena propiedad, 50 o más acciones.

Otro elegido por los Bancos y Banqueros sujetos al régimen de intervención y designado con arreglo a las normas establecidas por el Ministerio de Hacienda.

Otro nombrado por el Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.

Otro designado por las Corporaciones ofi-

ciales agrícolas en la forma determinada por el Ministro de Agricultura, Industria y Comercio.

Y tres nombrados por el Gobierno a propuesta del Ministro de Hacienda, que representarán en el Consejo los intereses generales de la Economía nacional.

Todo Consejero del Banco, con excepción de los tres del Estado, deberá previamente a su toma de posesión obtener la confirmación de su nombramiento mediante Orden ministerial, y depositar en fianza los extractos de 100 acciones inscritas a su nombre en plena propiedad, que se conservarán a disposición del Consejo hasta que, habiendo cesado en su cargo el afianzado, la Junta general de Accionistas apruebe los actos en que aquél haya tomado parte.

Asociados.

ART. 37. El Consejo del Banco, sin asistencia de los tres Vocales designados por Corporaciones, pero asociado de un número de

Accionistas igual al de sus Vocales concurrentes y designados por sorteos, hará la propuesta a la Junta general de los que hayan de ocupar las plazas que se cubran por elección de los Accionistas.

Para estos sorteos se dividirán en tres grupos los accionistas con derechos de asistencia a la Junta general: primero, de los que posean por derecho propio y por representación legal de 50 a 150 acciones; segundo, de los que posean en los mismos conceptos más de 150 y hasta 300 acciones, y tercero, de los poseedores de más de 300 acciones propias y por representación legal.

De cada grupo se sortearán siete asociados para constituir los 21 que se han de reunir con el Consejo para desempeñar su misión.

Para suplir las vacantes que entre los asociados puedan ocurrir, se designarán por el mismo procedimiento siete suplentes de cada grupo.

Estos sorteos se verificarán anualmente ante la Junta general ordinaria en la primera re-

unión que celebre y por los datos que arroje la lista de accionistas con derecho de asistir a ella y hayan obtenido la papeleta para la asistencia, siendo excluidos de tales sorteos los individuos del Consejo, excepción hecha de los tres designados por Corporaciones.

Vacantes.

ART. 38. El cargo de Consejero elegido por los accionistas durará cinco años, pudiendo ser reelegidos los que lo obtengan. La renovación se hará por quintas partes.

Las vacantes que ocurran se cubrirán por el Consejo en unión con los accionistas asociados a que se refiere el artículo anterior, dando cuenta a la primera Junta general ordinaria, la cual podrá confirmar los nombramientos o elegir otros Consejeros.

Los nombrados para ocupar las vacantes desempeñarán el cargo por el tiempo que falte a los substituídos para cumplir la duración de su mandato.

Remuneración.

ART. 39. Los Consejeros recibirán anualmente la asignación personal de 12.000 pesetas; el Gobernador, los Subgobernadores y los Consejeros devengarán, además, por su individual asistencia a cada sesión del Consejo, dietas de cien pesetas.

Los Consejeros que tengan necesidad de ausentarse lo avisarán previamente al Gobernador, el cual cuidará de que siempre haya número suficiente de asistentes a las sesiones.

Atribuciones.

ART. 40. Son atribuciones del Consejo:

1.^a Determinar el orden y la forma con que han de llevarse los registros de las acciones y de sus transferencias y los libros de cuentas de todos los negocios del Banco, en partida doble.

2.^a Fijar, con arreglo a las leyes, la suma y número de billetes que deban emitirse, su

tipo y sus circunstancias, y disponer en su caso la retirada y substitución de las series legítimas circulantes, si las circunstancias lo aconsejan.

3.^a Señalar, a propuesta de las Comisiones, los valores que se han de admitir en garantía y el tipo de su admisión.

4.^a Disponer el premio de los descuentos, préstamos, giros y créditos, en Madrid y en cada una de las Sucursales, y remuneración que haya de percibir el Banco por los demás servicios que preste.

5.^a Acordar el establecimiento de Sucursales, Cajas subalternas u otras dependencias en los puntos, dentro o fuera de la Nación, en que convenga al interés público y al del Banco; determinar el número, retribución y calidades de los individuos que han de componer sus Administraciones; nombrarlos y elegir los Comisionados y Corresponsales en las localidades de España o del Extranjero donde se estime conveniente tenerlos.

6.^a Estar al corriente de las operaciones

de la Administración, del movimiento de fondos y de la situación del Banco en todas sus dependencias.

7.^a Examinar el Balance que cada seis meses debe formarse de las cuentas del Banco y acordar la aplicación de los beneficios realizados, según corresponda, mediante bonificaciones a las cuentas que convenga sanear, abonos a los fondos de reserva y de previsión, pago de impuestos y distribución de dividendos.

8.^a Resolver sobre toda clase de contratos, incluso de adquisición y enajenación de inmuebles y sobre aceptación, cancelación, posposición y subrogación de inscripciones hipotecarias.

9.^a Fijar el número, las clases y los sueldos de los empleados y dependientes del Banco; nombrar los Jefes principales de las Oficinas centrales y Directores y Jefes de las Sucursales, Cajas subalternas y demás dependencias locales del Banco y proponer al Gobierno para los cargos de Subgobernadores.

10. Acordar la convocatoria de la Junta general de accionistas para sesiones ordinarias y extraordinarias en los casos previstos por estos Estatutos.

11. Aprobar la Memoria que formará la Administración y la cuenta general de las operaciones que ha de presentarse anualmente a la referida Junta general ordinaria.

12. Presentar a la misma Junta las proposiciones que juzgue convenientes, examinar las que hagan sus individuos y someterle su dictamen acerca de ellas.

13. Redactar el Reglamento general para la ejecución de los Estatutos y las modificaciones y reformas que convenga hacer en él, elevándolas a la aprobación del Gobierno, y dictar los demás Reglamentos de orden interior del Banco.

La precedente relación de facultades es meramente enunciativa y no limitativa, salvo las expresas del Gobernador y de la Junta general.

Facultades.

ART. 41. Los Consejeros podrán ejercer su iniciativa para proponer al Consejo los acuerdos y resoluciones que estimen convenientes a los intereses del Banco.

Sesiones.

ART. 42. El Consejo celebrará sesiones ordinarias dos veces por semana en los días que el mismo señale, a no ser que por falta de asuntos urgentes se determine en algún caso celebrar una sola, y además, las extraordinarias que exija el despacho de asuntos graves o urgentes. Estas últimas serán acordadas por el mismo Consejo, o convocadas por el Gobernador, por sí o a petición de cinco Consejeros. El Gobernador podrá convocar, cuando lo crea procedente para la celebración de sesiones especiales, a los Consejeros elegidos con arreglo al artículo 37 y a los tres del Estado.

Comisiones.

ART. 43. El Consejo se dividirá en cinco Comisiones permanentes, que se denominarán:

De Emisión

De Operaciones.

De Administración.

De Intervención.

De Sucursales.

El número de Comisiones permanentes podrá aumentarse si así lo estima necesario el Consejo y es aprobado por las dos terceras partes de votos del mismo.

ART. 44. Las Comisiones se nombrarán por el Consejo y se compondrán de un Subgobernador y de cuatro Consejeros de los quince elegidos por los accionistas y de los tres de nombramiento directo del Gobierno. La designación se hará después de la Junta general ordinaria. El Gobernador podrá asistir a las Comisiones que estime conveniente.

Salvo siempre la plena facultad del Consejo

para designar los miembros del mismo que han de formar las Comisiones, con arreglo a lo dispuesto en este artículo, si circunstancialmente o en algún caso especial estimase el Ministro de Hacienda conveniente que un Consejero de los tres del Estado nombrados por el Gobierno formase parte de alguna de las citadas Comisiones permanentes para la que no hubiera sido designado en propiedad ninguno de dichos Consejeros, hará saber tal conveniencia al Consejo por conducto del Gobernador. Si el Consejo, atendida la indicación del Ministro de Hacienda, hiciera la designación, el número de individuos de la Comisión correspondiente se entenderá ampliado en un Vocal.

Las Comisiones serán renovadas anualmente dentro de los noventa días siguientes a la celebración de la Junta general ordinaria; en toda renovación habrá de cesar uno de los dos Consejeros más antiguos en ella. En la designación de los individuos de las Comisiones, el Consejo procurará ofrecer a sus miembros la ocasión de adquirir en el mayor número posible de

Comisiones la experiencia necesaria para el mejor régimen y gobierno del Establecimiento. Lo dispuesto anteriormente no es aplicable a los Consejeros designados por las Corporaciones con arreglo a la base décima de la Ley, cuya colaboración en las Comisiones se regirá por lo dispuesto en el artículo 52.

Para la validez de los acuerdos de las Comisiones será precisa la asistencia, por lo menos, de dos Consejeros.

Por la individual asistencia a cada reunión de las Comisiones se devengarán dietas de 50 pesetas.

Emisión.

ART. 45. La Comisión de Emisión cuidará de la preparación de los billetes que el Banco haya de emitir, adquisición de papel, su estampación y condiciones que hayan de tener, su división en series, forma en que se hubieren de recoger y amortizar y demás incidencias de la circulación fiduciaria.

Operaciones.

ART. 46. La Comisión de Operaciones conocerá de todas las que se realicen en Madrid, y autorizará, dentro de los límites que señale el Consejo, la ejecución de aquéllas.

También le corresponde en este concepto proponer al Consejo las alteraciones que convenga hacer con respecto a las mismas operaciones en el tipo del descuento, interés de los préstamos y créditos, remuneración de los demás servicios que el Banco preste, valores que se hayan de recibir en garantía y tipos de su admisión, y las reformas que juzgue necesarias en las condiciones que deban regir para todas estas operaciones.

La misma Comisión entenderá en la adquisición de metales preciosos y en los Convenios que se concierten con el Gobierno y su ejecución, así como en todo lo relativo a las Agencias en el Extranjero.

Administración.

ART. 47. La Comisión de Administración entenderá en el régimen, personal, servicio y gastos de las Oficinas centrales y en los asuntos contenciosos, sean del Centro o de las Sucursales.

Igualmente formará, de acuerdo con el Gobernador, las propuestas razonadas al Consejo para el nombramiento de los Jefes de las Oficinas centrales.

Intervención.

ART. 48. La Comisión de Intervención tendrá a su cargo todos los asuntos de Contabilidad y Caja, ejerciendo su vigilancia sobre el orden y puntualidad en las cuentas y la custodia de los fondos y valores que en el Banco existan; examinará los Balances y propondrá al Consejo la distribución de los beneficios obtenidos.

Sucursales.

ART. 49. La Comisión de Sucursales entenderá en cuanto se refiera a éstas, su organización, administración, inspección y vigilancia, personal y operaciones que realicen, proponiendo al Consejo las reformas que estime oportunas para el mejor régimen de dichas oficinas, el tipo de descuento, interés de los préstamos y remuneración de los demás servicios en cada una de las Sucursales, los valores que se hayan de recibir en garantía y tipos de su admisión.

Será también de su competencia la propuesta al Consejo de la creación, organización, composición de las Administraciones, nombramiento de los individuos de éstas y formas de proceder en las mismas Sucursales y demás dependencias del Banco en territorio nacional, y de acuerdo con el Gobernador la propuesta para el nombramiento del Director Jefe en las Oficinas centrales y de los Directores y Jefes de las referidas Sucursales y dependencias.

Comisiones especiales.

ART. 50. El Consejo podrá acordar además la formación de Comisiones especiales para entender en los negocios que a su juicio lo requieran, cesando aquéllas una vez terminado el objeto de su formación.

Dictámenes.

ART. 51. Las Comisiones serán oídas precisamente en todos los asuntos sobre que haya de deliberar el Consejo, excepto en los que éste califique de urgentes, siendo ponente en todas ellas la Administración. También deberán dar su dictamen sobre las proposiciones o los negocios que el Gobernador someta a su examen, y podrán además tomar la iniciativa en la propuesta de las disposiciones que convenga adoptar en los ramos de que respectivamente estén encargadas.

El Consejo podrá delegar en cada una de las Comisiones la resolución de los asuntos que

estime conveniente y dentro de los límites que señale, y siempre que así se acuerde por dos tercios de los votos de los Vocales concurrentes.

Comisiones generales.

ART. 52. Los Consejeros elegidos por Corporaciones, con arreglo a la base décima de la Ley, podrán formar parte de las Comisiones que para el estudio de asuntos propios de su respectiva competencia el Consejo estime conveniente promover.

CAPITULO IV

DE LA JUNTA GENERAL

Junta general.

ART. 53. La Junta general se compondrá de los Accionistas que concurren a ella y posean en plena propiedad o en usufructo 50 ó más acciones inscriptas a su nombre desde tres meses antes de la celebración de aquélla.

Cuando se transmitan *mortis causa* unas acciones, el tiempo de posesión del causante se computará al derechohabiente.

La Junta será presidida por el Gobernador, según lo dispuesto en el artículo 25, y podrán asistir a ella todos los individuos del Consejo.

ART. 54. El derecho de asistencia a la Junta de accionistas es unipersonal y no puede delegarse. Los poseedores proindiviso de un grupo de 50 ó más acciones sólo podrán designar a uno de ellos para que asista en nombre de todos. Las Corporaciones no conferirán su representación sino a uno de sus miembros que, según sus Estatutos, pueda ostentarla. Las Compañías estarán representadas precisamente por uno solo de sus Gerentes.

A las mujeres casadas no divorciadas por sentencia firme, las representarán sus maridos; a los hijos menores, su padre o madre viuda con patria potestad; a toda persona constituida en tutela, solamente su tutor; a las sucesiones, concursos y quiebras, uno de sus representantes legales.

ART. 55. La Administración del Banco formará y expondrá en el local destinado a la Junta una lista de los Accionistas que hayan de constituirla. Para la formación de esta lista, los accionistas con derecho de asistencia habrán de obtener, hasta dos días antes de celebrarse la primera reunión, una papeleta que les autorice para concurrir a la Junta.

ART. 56. Durante los ocho días anteriores a la celebración de la Junta general ordinaria, los Accionistas con derecho de asistir a ella podrán examinar el balance y las cuentas del ejercicio anual.

ART. 57. Cada individuo de la Junta general sólo tendrá un voto, cualquiera que sea el número de las acciones que posea y represente, si este número no pasa de 150; dos votos si pasa de 150 y no excede de 300, y tres votos si posee y representa más de 300 acciones.

Toda persona con derecho de asistencia a la Junta y que no se halle comprendida en alguno de los tres grupos anteriores, permanecerá absténida en las votaciones, excepto el Gobernador.

ART. 58. La Junta general se reunirá en el mes de marzo de cada año, debiendo anunciarse antes del 1.º de febrero, en la *Gaceta de Madrid*, el día señalado para su reunión. Entre la primera sesión, en que se dará lectura de la Memoria anual y la sesión inmediata, mediará a lo menos una semana. Las sesiones no podrán durar más de cuatro días, sin autorización del Ministro de Hacienda.

ART. 59. Al examen y a la aprobación de la Junta general se someterán las operaciones del Banco y la cuenta de sus gastos, según resulten del balance y libros de contabilidad.

A continuación, la Junta confirmará o rectificará los nombramientos de Consejeros hechos para cubrir las vacantes ocurridas durante el año; e inmediatamente después, leído el dictamen del Consejo y Asociados sobre provisión de las plazas electivas en turno, resolverá lo que estime procedente, bien por aclamación, bien en votación secreta, si la piden diez o más asistentes.

La votación por papeletas se hará depositan-

do cada Accionista la suya en la urna que le corresponda; habiendo tres para los tres grupos de Accionistas de que hablan los artículos 37 y 57; computándose por dos y por tres votos cada uno de los que respectivamente se depositen en las urnas segunda y tercera.

Finalmente, la Junta resolverá sobre las proposiciones que el mismo Consejo o los Accionistas presenten, relativas al mejor servicio de los intereses nacionales y conducentes a la prosperidad del Establecimiento.

El orden de las deliberaciones, la procedencia de los discursos, la limitación del tiempo que pueda concederse a la discusión y la oportunidad de las votaciones, en cuanto no se determinen en el Reglamento general, se regularán en absoluto por la plena y discreta autoridad del Presidente.

ART. 60. Se convocará a Junta general extraordinaria, con autorización del Ministro de Hacienda, cuando el Consejo lo estime necesario.

Si cien o más Accionistas, que representen,

cuando menos, el 15 por 100 del capital social y que lo sean con tres meses de anticipación, solicitasen del Consejo, por medio de comunicación escrita, motivada la reunión de una Junta general extraordinaria, el mismo Consejo elevará con su informe la petición al Gobierno para que resuelva lo que juzgue conveniente.

ART. 61. Autorizada que sea por el Gobierno la celebración de Junta general extraordinaria, se convocará con ocho días de anticipación, por lo menos, expresando en la convocatoria los asuntos en que se haya de ocupar.

Son aplicables a estas Juntas los artículos que preceden en cuanto no se refieren a Balances anuales o elecciones.

Las deliberaciones de la Junta general extraordinaria se limitarán al objeto para que hubiese sido convocada, y sus resoluciones se adoptarán por las dos terceras partes de los votos de los concurrentes, haciéndose el cómputo con arreglo al artículo 57.

CAPITULO V

DE LAS SUCURSALES Y OTRAS DEPENDENCIAS

Sucursales y otras dependencias.

ART. 62. Las Sucursales, Cajas subalternas y demás dependencias, dentro o fuera de la Nación, forman parte del Banco, respondiendo el capital de éste a las obligaciones que con- mos se realizará de acuerdo con el Gobierno. traigan aquéllas. La creación de estos organiza- mos se realizará de acuerdo con el Gobierno.

ART. 63. La organización y las funciones de cada una de las Sucursales, Cajas y depen- dencias, y sus relaciones entre sí, se acomoda- rán a las operaciones propias del Banco para que se les autorice, conforme a las Leyes y Es- tatutos y a lo que dispongan los Reglamentos y los acuerdos del Consejo.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

Responsabilidad.

ART. 64. El Gobernador, los Subgobernadores y los Consejeros del Banco, los Directores y Administradores de las Sucursales y demás dependencias y los Jefes de las respectivas oficinas, serán responsables, cada uno según las atribuciones de su cargo, de las operaciones que ejecuten o autoricen fuera de las permitidas por las Leyes, Estatutos y acuerdos reglamentarios del Banco.

Empleados.

ART. 65. Para el servicio de las diversas oficinas y dependencias del Banco habrá los empleados necesarios, cuyas clases, categorías, sueldos y condiciones se fijarán en los Reglamentos y por acuerdos del Consejo.

El Consejo, en vista de los resultados del Balance anual, podrá proponer a la Junta general, cuando lo crea conveniente, la remuneración de servicios especiales de los empleados, distribuyendo entre ellos, según sus merecimientos, la gratificación que se acuerde.

Caja de pensiones.

ART. 66. La Caja de pensiones existente en favor de los empleados del Banco y de sus familias se rige por Reglamentos especiales que autoriza el Consejo, y será susceptible de las mejoras que en el orden de la previsión social convenga promover.

El Consejo, como hasta ahora, y con singular interés, cuidará siempre de que las obligaciones actuales y futuras de la Caja estén garantizadas y atendidas, no sólo con un descuento en los sueldos de los empleados de cualquier clase, sino (principalmente) con los capitales y rentas ya creados y los que en lo porvenir (se estimen necesarios) y se creen mediante subven-

ciones del Banco, donativos de otras procedencias o constitución de reservas a tenor del Real decreto de 4 de julio de 1921.

En su virtud, dichos capitales, hasta la liquidación de la Caja, no podrán afectarse a otras obligaciones que al pago de las pensiones reglamentarias, hasta que, extinguidas todas, revierta el remanente al propio Banco.

Estatutos.

ART. 67. Salvo especial disposición legislativa, no podrá procederse a la formación de nuevos Estatutos o a la reforma de los existentes sin que la Junta general de Accionistas, por las dos terceras partes de votos, al menos, de los individuos que a ella concurran, lo acuerde así.

En la convocatoria de la Junta para estos casos se expresará si se ha de tratar de una reforma general o parcial, y si fuese parcial se enumerarán los artículos que se hayan de reformar, suprimir o añadir.

El procedimiento para la reforma general consistirá en el nombramiento por la Junta de una Comisión delegada que, en unión del Consejo, lleve a efecto la reforma y la someta a la aprobación del Gobierno. Si la reforma hubiera de ser parcial, el Consejo la propondrá directamente a la Junta general de Accionistas.

En todo caso, la aprobación definitiva de los Estatutos o de su reforma se publicará mediante Decreto, oído previamente el Consejo de Estado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1.ª El Consejo, lo antes posible, someterá a la aprobación del Ministerio de Hacienda el proyecto de Reglamento general.

2.ª Los presentes Estatutos comenzarán a regir al día siguiente de su publicación en la *Gaceta de Madrid*.

Dado en Madrid a veinticuatro de mayo de mil novecientos treinta y tres.—NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.—El Ministro de Hacienda, *Manuel Azaña*.

INDICE

	<i>Páginas</i>
<i>Estudio preliminar</i>	3
<i>Bibliografía</i>	54

LEY DE ORDENACIÓN BANCARIA

Régimen del Banco de emisión.....	60
Decreto de 27 de mayo de 1931.....	69
Régimen de la Banca privada.....	89
Artículo 541 del Código de Comercio.....	99
Artículo 539 del Código de Comercio.....	101
Disposición transitoria.....	103
Artículo de la Ley de 26 de noviembre de 1931 que no modifican ninguno de los de la Ordenación Bancaria.....	104

REGLAMENTO

Sección primera.—De la Banca privada en general.

Artículos del 1 al 5.....	107
---------------------------	-----

Sección segunda.—Del régimen de la Banca privada.

Artículos del 6 al 10..... 112

Sección tercera.—De la comunidad Bancaria española y de su representación.

Artículos del 11 al 17..... 123

Sección cuarta.—Atribuciones del Consejo superior Bancario.

Artículos del 17 al 20..... 133

Artículo 2.º del Código de Comercio..... 137

Sección quinta.—De la composición del Consejo superior Bancario y de las condiciones de los cargos.

Artículos del 21 al 24..... 139

Sección sexta.—De los derechos y deberes de quienes desempeñan cargos en el Consejo superior Bancario.

Artículos del 25 al 31..... 143

Sección séptima.—Del ejercicio del veto.

Artículos 32 y 33.....	146
------------------------	-----

Sección octava.—De las relaciones con el Gobierno.

Artículos del 34 al 36.....	148
-----------------------------	-----

Sección novena.—De las relaciones con el Banco de España.

Artículos 37 y 38.....	149
------------------------	-----

Sección décima.—De la inspección bancaria.

Artículo 39.....	149
------------------	-----

Sección undécima.—Del régimen económico.

Artículos 40 y 41.....	150
Ministerio de Hacienda.—Decreto del 28 de agosto de 1931.....	152

ESTATUTOS DEL BANCO DE ESPAÑA

Capítulo I.—Sobre el capital, legislación y acciones del Banco de España.

Capital.—Artículo 1.º.....	160
Legislación.—Artículo 2.º.....	161
Artículo 159 del Código de Comercio.....	162

Acciones.—Artículo 3.º.....	163
Contratación de las Acciones.—Artículo 4.º...	164
Artículo 93 del Código de Comercio.....	165
Artículo 58 del Código de Comercio.....	166
Artículo 596 de la Ley de Enjuiciamiento civil.	167
Artículo 36 del Código de Comercio.....	167
Artículo 95 del Código de Comercio.....	168
Artículo 26 del Código de Comercio.....	169
Artículo 104 del Código de Comercio.....	169
Artículo 96 del Código de Comercio.....	170
Artículo 97 del Código de Comercio.....	171
Artículo 98 del Código de Comercio.....	171
Artículo 946 del Código de Comercio.....	172
Artículo 944 del Código de Comercio.....	173

Capítulo II.—De las operaciones.

Emisión.—Artículo 5.º.....	174
Depósitos.—Artículo 6.º.....	175
Responsabilidad.—Artículo 7.º.....	176
Devolución de depósitos.—Artículo 8.º.....	177
Cuentas corrientes.—Artículo 9.º.....	177
Descuentos.—Artículo 10.....	179
Préstamos.—Artículo 11.....	182
Préstamos especiales.—Artículo 12.....	183
Ventas de garantías.—Artículo 13.....	184
Ventas de garantías especiales.—Artículo 14..	186

	<i>Páginas</i>
Créditos con garantías.—Artículo 15.....	187
Créditos personales.—Artículo 16.....	188
Artículo 1.429 de la Ley de Enjuiciamiento civil.....	188
Cajas de alquiler.—Artículo 17.....	189
Otras operaciones.—Artículo 18.....	190
Servicios al Estado.—Artículo 19.....	193
Secreto de las operaciones.—Artículo 20.....	194
Balances.—Artículo 21.....	195
Fondos de reserva y previsión.—Artículo 22..	196
<i>Capítulo III.—Del Gobierno, Consejo y Administración.</i>	
Consejo.—Artículo 23.....	197
Directores de servicio.—Artículo 24.....	197
Gobernador.—Artículos del 25 al 29.....	198
Subgobernadores.—Artículos del 31 al 33....	202
Consejeros.—Artículo 34.....	204
Incompatibilidades.—Artículo 35.....	205
Elección de Consejeros.—Artículo 36.....	205
Asociados.—Artículo 37.....	206
Vacantes.—Artículo 38.....	208
Remuneración	209
Atribuciones.—Artículo 40....	209
Facultades.—Artículo 41.....	213
Sesiones.—Artículo 42.....	213
Comisiones.—Artículos 43 y 44.....	214

	<i>Páginas</i>
Emisión.—Artículo 45.....	216
Operaciones.—Artículo 46.....	217
Administración.—Artículo 47.....	218
Intervención.—Artículo 48.....	218
Sucursales.—Artículo 49.....	219
Comisiones especiales.—Artículo 50.....	220
Dictámenes.—Artículo 51.....	220
Comisiones generales.—Artículo 52.....	221

Capítulo IV.—De la Junta general.

Junta general.—Artículos del 53 al 61.....	221
--	-----

Capítulo V.—De las Sucursales y otras dependencias.

Sucursales y otras dependencias.—Artículos 62 y 63.....	227
---	-----

Capítulo VI.—Disposiciones generales.

Responsabilidad.—Artículo 64.....	228
Empleados.—Artículo 65.....	228
Caja de pensiones.—Artículo 66.....	229
Estatutos.—Artículo 67.....	230
Disposiciones transitorias.....	231

VOLUMENES QUE COMPRENDE LA COLECCION "JURIS"

- I.—*Toda la legislación electoral.* 3 ptas.
 - II.—*Legislación del trabajo y de la jornada.*
3 ptas.
 - III.—*Toda la legislación hipotecaria.* 4 ptas.
 - IV.—*Todas las leyes políticas.* 3 ptas.
 - V.—*Legislación Municipal.* 2 ptas.
 - VI.—*Código Penal de 1870.* 3 ptas.
 - VII.—*Código de Comercio.* 3 ptas.
 - VIII.—*Manual del Jurado.* 3 ptas.
 - IX.—*El Divorcio y las leyes laicas de la República.* 3 ptas.
 - X.—*Leyes del Timbre y Derechos reales.*
3 ptas.
 - XI.—*Código Penal de la República.* 3 ptas.
 - XII.—*Toda la Legislación Agraria de la República.* 3 ptas.
 - XIII.—*Toda la Legislación sobre Accidentes del trabajo en la Industria y en la Agricultura.* 3 ptas.
- Envío contra reembolso de toda clase de libros.

VOLUMENES QUE COMPRENDE LA "COLECCION POPULAR DE LEYES"

- I.—*Jurados mixtos*. 2.^a edición.
 - II.—*Contrato de trabajo*. 2.^a edición.
 - III.—*Accidentes de trabajo (Ley)*, 2.^a edición.
 - IV.—*Colocación obrera y Trabajadores extranjeros*.
 - V.—*Accidentes de trabajo (Reglamento) y Estatuto de la Caja Nacional*.
 - VI.—*Retiro obrero*.
 - VII.—*Seguro de maternidad*.
 - VIII.—*Paro forzoso*.
 - IX.—*Patronato de Previsión social*.
 - X.—*Tribunal de Garantías Constitucionales*.
 - XI.—*Ordenación Bancaria*.
-

EXCLUSIVA DE VENTA:
AGENCIA GENERAL DE LIBRERÍA
Y
ARTES GRÁFICAS
APARTADO 502 - PI Y MARGALL, 9
M A D R I D

2,50 PESETAS

6200